

Ingrid de Jong

Las Alianzas Políticas indígenas en el período de la Organización Nacional: una visión desde la Política de tratados de Paz (Pampa y Patagonia 1852-1880)

Introducción

Las décadas centrales del siglo XIX fueron el escenario de profundos cambios en los vínculos entre las poblaciones indígenas de Pampa, Patagonia y la Araucanía y los Estados nacionales de Argentina y Chile. La inserción más definida en los mercados internacionales y la consolidación institucional y territorial de estos países redefinieron la significación que los territorios indígenas, a ambos lados de la cordillera de los Andes, tendrían para los proyectos de desarrollo económico de las clases dirigentes. Mientras el espacio fronterizo que en los últimos doscientos años había canalizado las relaciones interétnicas en la Araucanía perdía vigencia, en las Pampas los planes de expansión ganadera entraban en contradicción con la presencia indígena en estos territorios y aún más con la actividad maloquera de muchos de estos grupos.

Desde el estado argentino, la ocupación efectiva de los territorios indígenas y el sometimiento militar de estos grupos fue concibiéndose como la única alternativa viable para controlar a una población indígena en la que se reforzaban los rasgos de “salvajismo” y amenaza a la “civilización”. Paradójicamente, durante este período la actividad diplomática entre el gobierno nacional y los grupos indígenas fue más extendida e intensa que en épocas precedentes. Los tratados de paz –propiciados por el estado y buscados activamente por los caciques– canalizaron gran parte de las relaciones de frontera en las últimas tres décadas previas a la ocupación. La sorprendente coexistencia de acuerdos pacíficos en un período de definición de los objetivos de conquista territorial por parte del estado argentino conduce a preguntarse por la funcionalidad de las prácticas diplomáticas como instrumentos de control e intervención sobre una sociedad indígena que resistía la expansión estatal.

El despliegue de esta actividad diplomática dirigida, estratégica, así como la disposición de los indígenas a participar en estos tratados ha sido relegada por una historiografía que acentuó los aspectos de choque bélico entre ambas sociedades. Sin embargo, creemos que es necesario comprender el desarrollo de esta otra faz de la política estatal y sus efectos en el mundo indígena del siglo XIX. Apuntamos a analizar la política de tratados durante la “organización nacional” como una práctica de negociación en la que se pusieron en acto estrategias indígenas y estatales

que, en el contexto de las últimas décadas de frontera, fueron canalizando una creciente asimetría entre estos dos sectores de población. Proponemos por ello considerar esta práctica como un “dispositivo de poder” estatal (Foucault 1979), cuyas modalidades de aplicación y sus efectos de ordenamiento del campo político indígena terminaron siendo funcionales a los objetivos de avance territorial del estado.

Iniciaremos este trabajo con una síntesis de los enfoques predominantes sobre las transformaciones políticas de la población indígena de Pampa y Patagonia hacia mediados del siglo XIX, apuntando a sustentar la importancia de analizar las relaciones diplomáticas sostenidas con el gobierno argentino, así como sus efectos en el campo indígena. A continuación, describiremos las principales características de la política de tratados de paz mantenida por indios y blancos desde las primeras décadas del siglo XIX, haciendo énfasis en las formas y modalidades específicas que asume la aplicación de esta política al promediar el siglo y hasta 1879, año en que se inician las campañas militares de ocupación de los territorios indígenas. Intentaremos contextualizar esta descripción en el marco de la dinámica que asumen los intentos de avance de frontera –y de resistencia indígena a los mismos– entre las décadas de 1850 y 1870. Creemos que esa es la mejor manera de mostrar a los tratados de paz como dispositivos de poder orientados a intervenir en los vínculos del campo político indígena y limitar su capacidad de resistencia. Nos ha interesado, finalmente, identificar formas más situadas y microscópicas por las que las prácticas diplomáticas ejercieron efectos en las formas tradicionales de la autoridad indígena, condicionando la agencia política indígena y canalizando así la dominación en formas más sutiles.

Capítulo 4: Políticas indígenas y estatales en la frontera sur

1. La sociedad indígena en Pampa y Patagonia en el siglo XIX

La llamada “frontera sur” con el indígena en el actual territorio argentino –un amplio arco que se desplegaba desde el sur de la actual provincia de Mendoza en la cordillera de los Andes, pasando por las actuales provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe, atravesando de norte a sur la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el Atlántico– constituyó un espacio de interacción, confrontación e influencias recíprocas entre indígenas y blancos desde los primeros momentos de ocupación colonial. Integraba a su vez un ámbito mayor que incluía a las poblaciones del territorio de la Araucanía y sus relaciones de frontera allende la cordillera de los Andes. En referencia a este espacio, distintos autores han destacado su carácter de unidad social y económica que, si bien se originaba en relaciones pre-existentes a la presencia hispana, había adquirido una nueva dinámica a partir de los vínculos entre los estados coloniales y los grupos indígenas del área. Ya en 1981 León Solís proponía la denominación de “territorio indio” para dar cuenta de

los vínculos de cooperación política y económica entre grupos indígenas de ambos lados de la Cordillera, que habrían condicionado sus relaciones con los estados coloniales y republicanos (León Solís 1981). Posteriormente, la atención prestada a los intercambios comerciales, los flujos migratorios e influencias culturales vertebrados por los Andes condujeron a comprender a las poblaciones indígenas como actores de un “espacio fronterizo” que a lo largo de más de tres siglos articuló a la región del Plata y el sur chileno como dos polos de desarrollo capitalista a ambos lados de la Cordillera (Mandrini 1991; Bandieri 1996; Pinto Rodríguez 1996). Así también, trabajos como los de Bechis y Palermo se refirieron al “área araucopampeano-patagónica” (Bechis 2008) como una unidad desde la cual comprender las interrelaciones internas al mundo indígena, cuya articulación con los mercados de Chile y Argentina la convertía en parte de un “sistema” de carácter “poliétnico y policéntrico” (Palermo 1999).

En este fenómeno de larga duración que fue el complejo fronterizo¹ de la Araucanía y las Pampas, la dinámica principal parece haberse vinculado especialmente a la participación de la población indígena como intermediarios comerciales de ganado entre las Pampas y la Araucanía. Estas redes comerciales indígenas se expandieron y redimensionaron a partir de los intercambios a los que daban lugar los centros coloniales en Chile y el Río de la Plata, confluyendo y canalizando las importantes transformaciones económicas, políticas y étnicas que involucraron a las poblaciones indígenas y cristianas a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, agotado el ganado libre o “cimarrón” que había proliferado en las pampas durante gran parte de la etapa colonial, este circuito regional de comercio de ganado comenzó a abastecerse de los animales criados en las estancias de frontera. Los “malones” –invasiones dirigidas a saquear el ganado de estos establecimientos– devinieron en una empresa económica que podía convocar la acción conjunta de diversos líderes indígenas y de distintas parcialidades étnicas de ambos lados de los Andes. Estas redes comerciales, en las que se intercambiaban animales y otros productos como sal y textiles a cambio de aguardiente, tabaco y metales, impulsaron una creciente presencia araucana en las pampas e intensificaron sus relaciones con los grupos y parcialidades de Pampa y Norpatagonia. Éstas, caracterizadas por una organización de carácter segmental,² dispusieron de una gran flexibilidad para la incorporación de las nuevas poblacio-

-
- 1 Esta noción plantea la necesidad de tomar en cuenta todos los espacios (fronteras diferentes, “tierra adentro” o *hinterlands*, etc.), puntos de vista (alianzas de diverso tipo, redes de confederación, subordinación, parentesco, intercambio) y combinación de actividades diversas (guerra, pillaje, diplomacia, comercio) que configuran espacios macrorregionales desde los que se debe reconstruir el actuar indígena (Boccarda 2005: 47).
 - 2 Basándose en Middleton (1958), Bechis entiende por tal a una configuración política formada por la repetición o fisión de unidades o segmentos autosuficientes más pequeños que la sociedad, sin que haya una estructura política superior que los contenga (Bechis [1989] 2008).

nes, lo cual redundó en una mayor integración al comercio fronterizo. De esta manera, las poblaciones asentadas en ambos lados de la Cordillera, los grupos pampas de las llanuras del este y los grupos tehuelches del sur patagónico incrementaron sus contactos y conformaron frecuentemente confederaciones guerreras con el objetivo de abastecerse de ganado. Ello repercutió en dinámicos procesos de etnogénesis, favoreciendo la vinculación por parentesco, el mestizaje y hasta su fusión en nuevos grupos, como los ranqueles del norte pampeano y los huilliches del sur neuquino.

En las primeras décadas del siglo XIX este complejo fronterizo sufrió el impacto de los procesos independentistas. El desarrollo de la “Guerra a Muerte” en Chile (1819-1821) influyó profundamente en las relaciones que ligaban a la Araucanía con las Pampas. Los enfrentamientos entre “patriotas” y “realistas” en territorio chileno involucraron a los distintos sectores indígenas y se trasladaron al escenario pampeano, intensificando los saqueos en las fronteras y la migración de contingentes de composición étnica y política heterogénea que, o bien respondían a las facciones en pugna o aprovechaban la oportunidad de hacer sus propias incursiones comerciales. A estas primeras décadas del siglo corresponde la mayor migración de población araucana, cuya presencia consolidaría el perfil de una sociedad indígena profundamente mestizada. Los nuevos grupos arribados a las pampas entraron en relaciones con el gobierno argentino y se asentaron definitivamente en este espacio, cambiando la configuración política previa del mapa indígena pampeano. A su vez, algunos de los líderes indígenas arribados en esta etapa intensificaron sus alianzas con grupos locales sin perder el contacto con agrupaciones del oeste cordillerano, fortaleciendo así su control sobre los circuitos ganaderos.

Es así que en este extremo sur del continente americano gran parte de las poblaciones indígenas lograron desplegar estrategias novedosas de adaptación y resistencia a la presencia hispanocriolla, manteniendo al mismo tiempo su soberanía territorial y política hasta la etapa de consolidación de los estados republicanos de Chile y Argentina (Bocara 2003; 2005). En el contexto de las décadas centrales del siglo XIX muchas de las parcialidades ligadas al comercio de ganado entre las Pampas y la Araucanía habrían encontrado oportunidades de acumulación económica y éxito político que favorecieron, según algunos autores, la transformación de las pautas políticas tradicionales de la organización indígena, dando lugar al surgimiento de “grandes cacicatos” (Varela/Font 1996; Mandrini 2000; 2002), “sociedades de jefatura” (Villar/Jiménez 2003) o “jefaturas de nuevo tipo” (Vezub 2009). Las posibilidades de enriquecimiento derivadas de la participación en los circuitos comerciales y las relaciones con los gobiernos, así como los conflictos militares implicados por los procesos independentistas, habrían permitido la jerarquización y diferenciación económica interna y el fortalecimiento de liderazgos con rasgos

cualitativamente diferentes a los de la autoridad y el consenso que regían en estas sociedades segmentales.³

Si bien hay quienes sustentan que estas transformaciones ya estaban presentes a fines del siglo XVIII (Mandrini 2000), la mayor parte de estas propuestas toman como ejemplos a los caciques que actuaron durante las décadas centrales del siglo XIX. De esta manera, los grandes líderes que entraron en relación con los agentes del estado argentino en las últimas décadas de existencia de la frontera –Mariano Rosas y Baigorrita entre los ranqueles del norte patagónico, Feliciano Purrán entre los pehuenches, Juan Calfucurá en el oeste de la provincia de Buenos Aires y Valentín Sayhueque como jefe de los huilliches o “manzaneros” en el sur de la actual provincia patagónica de Neuquén– son considerados los exponentes de estos jefes de gran prestigio y poder bajo quienes se habrían configurado las grandes unidades políticas presentes en el espacio pampeano-norpatagónico a mediados del siglo XIX.⁴

Respecto de este panorama, otros enfoques discutieron la generalización de las “grandes jefaturas” como modelo para entender los cambios políticos en estas sociedades indígenas a lo largo del siglo XIX. Bechis ha subrayado la permanencia de los rasgos segmentales de la sociedad indígena de Pampa y Patagonia hasta las etapas finales de la frontera, planteando que esta continuidad debe entenderse como un “efecto sesgante”,⁵ es decir, como derivado de las relaciones de los grupos indígenas de la región con el Estado argentino. Para esta autora, la relación con los gobiernos durante el siglo XIX habría favorecido el crecimiento de las parcialidades amigas y condicionado el de aquellas más problemáticas ante los intereses estatales, pero habría fracasado en sus intentos de cambiar la relación entre el cacique y los “mocetones”, la que se habría mantenido inalterada, es decir, sin modificar el tipo de *autoridad*, por oposición a *poder*, que unía a los caciques con sus seguidores.⁶ Critica así la aplicación del modelo de “jefatura” como un resultado evolutivo necesario en sociedades sin estado en contacto con los estados, subrayando que este carácter no coercitivo de los cacicazgos continuó dotando a la sociedad indí-

3 Como ya fue explicado en el Cap. I de Lidia Nacuzzi, Bechis toma esta distinción de Fried para quien “*autoridad* se refiere a la habilidad de canalizar la conducta de otros en ausencia de amenazas o uso de sanciones negativas, *poder* es la habilidad de canalizar la conducta de otros por la amenaza o uso de sanciones negativas” (Bechis 2008: 264).

4 Varela/Font (1996); Mandrini (2000; 2002); Villar/Jiménez (2003); Varela/Cúneo (2006).

5 Propuesta inicialmente por Fried, la noción de “efecto sesgante de las situaciones secundarias” supone “un cambio en la complejidad de las instituciones políticas en presencia de sociedades más desarrolladas políticamente” (Fried 1975 en Bechis 2008: 271).

6 Bechis (2008: 274). Otros trabajos apuntan asimismo a relativizar el cambio de la base voluntaria que unía a un cacique con sus seguidores, señalando que las negociaciones con el estado habrían consolidado el prestigio de algunos caciques sin modificar el lugar del lenguaje de parentesco y la reciprocidad como mecanismo de legitimación política (Morrone 2004; Jong 2007).

gena de una capacidad flexible de fusión y fisión de grupos y limitando la conformación de estructuras jerarquizadas de poder.

Desde esta visión, la institución del cacicazgo en la frontera sur de mediados del siglo XIX se caracterizaba por el ejercicio de una “autoridad” en la cual participaban altas dosis de legitimidad. En este sentido, si bien la legitimidad –por oposición a la fuerza– forma parte en mayor o menor grado de todo apoyo político, la diferencia en el caso de estas sociedades segmentales está en el carácter obligatorio del consenso para poder llevar a la práctica una tarea de gobierno. En una sociedad de este tipo no podía concebirse la obediencia a un líder sin mediar compromisos previos de parentesco o reciprocidad, ya que éste no tenía ninguna posibilidad de obtener por la fuerza el consentimiento de toda o una parte de su parcialidad. Las pautas de legitimidad indígena para la toma de decisiones comprendían procedimientos específicos, tales como los parlamentos, que mantenían la actividad deliberativa y decisional en el ámbito de la comunidad, dejando al cacique la responsabilidad ejecutiva y organizacional. El cacique podía influir en las decisiones pero mediante su capacidad de persuasión, por la práctica de la oratoria y por el prestigio acumulado en base a sus actuaciones como líder guerrero o como negociador con el estado; es decir, “el líder no podía obrar por cuenta propia o dar órdenes legislativas. Debía convencer”. Puede postularse así una relación intrínseca entre estos liderazgos, en los que el acatamiento y el reclutamiento tenían una base voluntaria, con las características segmentales de estas sociedades, en tanto los “mocetones”, “conas” y “capitanejos” obedecían al cacique que más bienes conseguía, pero nada impedía otorgar su obediencia a otro cacique si la diferencia era significativa. Los liderazgos eran así susceptibles de dinámicas con tiempos fuertes y débiles por lo que no podemos pensar en procesos unidireccionales de concentración del poder (Bechis 2008: 290).

Esta competitividad estructural de la sociedad segmental y las potencialidades de fisión y fusión de los grupos otorgaron a las unidades políticas un carácter dinámico, tanto en su tamaño como en su composición y duración. Según algunos autores, el “cacicato” considerado como la unidad política básica, podía coincidir o integrar una “agrupación”.⁷ Pero, además, estas unidades podían recortarse atravesando los límites étnicos e involucrando la confederación de actores provenientes de agrupaciones o parcialidades étnicamente diferentes e incluso grupos sociales no indígenas. La identificación de las unidades políticas indígenas con las “grandes jefaturas” corre el riesgo de identificar *cacique* con agregados cuya dimensión y estructura no terminan de definirse, como los de *tribu*, *agrupación*, *parcialidad* o

7 Crivelli Montero (1991). Bechis (2008: 276-277): “algunas agrupaciones eran unidades políticas mientras que otras estaban formadas por varias unidades [...] una misma agrupación podía tener una u otra formación en períodos sucesivos ya que los procesos de fusión y fisión operaban o amenazaban con operar constantemente.

grupo étnico. Esta identificación refuerza la imagen de una conducta política unificada detrás de los caciques y la de éstos como líderes de unidades étnico-políticas relativamente estables, lo cual está lejos de acercarse a las reales dinámicas políticas indígenas en este período. En este sentido, aportes recientes contribuyen a relativizar la imagen del campo político como ligado a límites étnicos preestablecidos (Villar/Jiménez 2003; Tamagnini 2007). Delrio y Ramos, por ejemplo, han mostrado que el campo de la *performance* política indígena fue bastante más complejo. Analizando el “parlamento” como mecanismo de articulación política, los autores destacaron el funcionamiento de espacios sociales que impugnan “tanto los límites de las fronteras bi-nacionales como aquellos impuestos por gran parte de la explicación etnológica”. Los parlamentos daban lugar en ocasiones a reuniones multi-étnicas que vinculaban grupos de territorios distantes, configurando espacios donde se fortalecían circuitos de información y alianzas entre grupos y caciques, en los que podían tomarse decisiones políticas con performatividad sobre las relaciones entre los grupos originarios y con la sociedad criolla (Delrio/Ramos 2006: 5). Asimismo, una aproximación a la reconstrucción de la confederación de Calfucurá a lo largo de las varias décadas de su existencia, nos permitió diferenciar operativamente la instancia de la confederación por él liderada de la de su cacicazgo, identificando los procesos de fluctuación en las alianzas políticas mantenidas por este cacique indígena (Jong/Ratto 2008).

Ante estas posiciones, que tienden a presentarse como imágenes polarizadas, creemos necesario enfocar este período atendiendo a las relaciones políticas, sus dinámicas, los instrumentos e instituciones involucrados, e intentar una reconstrucción que esté dispuesta a dejar de lado posturas o conductas monolíticas, tanto sobre la sociedad indígena como del estado nacional. Ello implica que, en lugar de partir de la imagen de grandes líderes consolidados en correspondencia con grandes unidades políticas, intentaremos partir de las formas y modalidades adoptadas por las relaciones entre estado y sociedad indígena, para luego identificar las dinámicas que asume la acción política de ambas comunidades en un mismo campo político (Swartz/Turner/Tuden 1994). Desde nuestra perspectiva, es necesario conocer con mayor profundidad los dispositivos de poder estatales involucrados en las relaciones de frontera –en el contexto específico de la segunda mitad del siglo XIX– para dar cuenta de las probables transformaciones en la sociedad indígena. Rescatamos por ello el concepto referido al “sesgante efecto de las situaciones secundarias” para abordar las probables transformaciones operadas en la configuración de unidades políticas en la sociedad indígena de Pampa y Patagonia.

Reconstruir las prácticas y dispositivos de poder empleados por el estado sobre la sociedad indígena no es un desafío menor para el período que analizamos, en tanto son escasos los trabajos dedicados a la política hacia el indígena anterior a la “Conquista del Desierto”. Para la Araucanía, la influencia de los dispositivos estatales ha sido considerada central para aquellos enfoques que registran las transfor-

maciones políticas e identitarias entre las sociedades indígenas del sur chileno. Boccara ha caracterizado las modalidades de relación coloniales como “dispositivos de poder” con efecto en la redefinición de las identidades y en las unidades políticas indígenas, de manera tal que la dinámica, la estructura y el funcionamiento políticos “mapuche” del siglo XVIII se diferenciaban sustancialmente de los de los “reche” del siglo XVI. Entre estos dispositivos, el parlamento jugó un papel central en las negociaciones entre los indígenas y el estado colonial, impulsando cambios que se expresaron tanto en la concentración del poder en los caciques como en la transformación de la unidad social bajo la que eran tomadas las decisiones políticas y que constituían el marco de referencia identitario (Boccara 2007; 1999; 2003).

En el marco pampeano patagónico el papel de la diplomacia comenzó a ser tratado por trabajos de diversas características, entre los que rescatamos aquellos que insertan estas prácticas diplomáticas en dinámicas de relación bélico-pacíficas que caracterizaron las relaciones con los indígenas durante el período colonial. Para Lázaro Ávila, por ejemplo, los acuerdos pacíficos viabilizaron la creación de “ámbitos de consenso”, en los que instituciones como el parlamento, la junta y el tratado fueron instrumentos y espacios para la resolución de conflictos entre ambas sociedades. Entre las sociedades indígenas, donde el poder político estaba fragmentado y no cabía la imposición coercitiva, el parlamento constituía ya desde tiempos prehispánicos el recurso para tomar decisiones ante problemas que afectaban a diversas unidades sociopolíticas. A su vez, los españoles habían incorporado el parlamento y los tratados de paz desde sus propias experiencias de conflictos y acuerdos sucesivos en el espacio europeo, en especial en la Edad Media durante la Reconquista (Lázaro Ávila 1998; 2002). Otros trabajos han tenido la virtud de enfatizar este vínculo entre el tratado –como la instancia de la negociación– con el malón –como el momento de conflicto militar– poniendo en relevancia que los objetivos de muchos de los malones o ataques a la frontera se dirigían a crear las condiciones para la negociación o cambiar la estructura de las relaciones con el mundo colonial (Crivelli Montero 1991). La lógica de “hacer la guerra para negociar” permite explicar el sentido de algunos malones indígenas. Así, pueden diferenciarse los “malones políticos” –que buscaban crear un efecto en el orden de las relaciones entre indígenas e hispanocriollos– de los “malones económicos”, cuyo objetivo se restringía a la apropiación de ganado. En este camino, creemos que los primeros deben considerarse una forma de acción política que complementó e interactuó con las prácticas diplomáticas, prolongando así aspectos que ya eran propios de las prácticas sociales y políticas indígenas en las Pampas y la Araucanía. El *weichán*, la guerra propiamente dicha, que requería la confederación de varias unidades autónomas lograda bajo acuerdos ritualizados en parlamentos, podría así asimilarse a lo que llamamos “malones políticos”, mientras que los *malones* –en la que un grupo de aliados concertaba esfuerzos para llevar adelante una incursión,

sin que fuera necesario una instancia previa de legitimación— podrían considerarse como “malones económicos”.⁸

En el marco de un renovado interés por el estudio de las prácticas políticas de las poblaciones indígenas hacia los estados coloniales y republicanos, sólo recientemente se ha comenzado a dar mayor importancia a las prácticas diplomáticas desarrolladas por el estado argentino. Debe considerarse especialmente la extensa recopilación de tratados de paz realizada por Abelardo Levaggi (Levaggi 2000), que ha permitido a otros investigadores una visión panorámica de esta práctica entre los siglos XVI y XIX. A su vez, en la última década han comenzado a surgir trabajos dedicados a reconstruir las dinámicas políticas indígenas, tanto para el caso de los ranqueles (Tamagnini/Pérez Zavala 2002; Pérez Zavala 2007), como de los salineros e indios amigos de la provincia de Buenos Aires (Ratto 2003; 2006; 2007; entre otros), o los “manzaneros” de Sayhueque (Vezub 2005; 2009), desde enfoques que apuntan a identificar la iniciativa y la variedad de estrategias indígenas frente a los procesos de expansión de los estados. Aunque no están centrados en las relaciones diplomáticas, estos trabajos permiten completar un panorama en el que los tratados de paz parecen constituir el dato constante como instrumento de relación entre el estado y la población indígena. Ya desde la primera mitad del siglo XIX, y como base del “Negocio Pacífico de indios”, tuvieron un lugar central en la política del gobernador Juan Manuel de Rosas hacia los indígenas, adquiriendo una mayor sistematicidad a partir de la década de 1860 (Levaggi 2000; Jong 2007; 2008).

2. El negocio pacífico de indios

La dinámica de las relaciones interétnicas en las fronteras pampeanas cambia notoriamente en las primeras décadas del siglo XIX, y esto tiene que ver con al menos dos elementos novedosos de las fuerzas estatales criollas: en primer lugar, se definirá cada vez más claramente la intención de avanzar sobre las tierras indígenas; en segundo lugar, se iniciará un proceso de segmentación entre fuerzas políticas blancas que terminará involucrando a las fuerzas indígenas. La captación de apoyos indígenas se tornará un factor estratégico de estas luchas faccionales (Bechis 1998; Quijada 2002), y uno de los principales instrumentos utilizados para ese fin serán los tratados de paz.

La influencia que esta participación ejerce en la configuración de unidades políticas indígenas y sus relaciones internas puede rastrearse ya en la primera mitad del siglo XIX, bajo el “negocio pacífico de indios” desarrollado por Juan Manuel

8 Esta distinción era realizada ya por jefes de frontera como Álvaro Barros, al referirse a invasiones “de guerra” y “mercantiles” (Barros 1975: 113). Hemos tomado la diferenciación entre *tautulum* —equivalente a la vendetta familiar—, el *malón* y el *weichán* del trabajo de Villar/Jiménez (2003).

de Rosas a lo largo de su prolongado gobierno (1829-1832 y 1835-1852). La práctica de negociar con caciques, otorgar regalos y facilitar intercambios comerciales, propia de las políticas borbónicas, fue sistematizada por Rosas bajo acuerdos que fortalecieron a algunos grupos como “indios amigos” del gobierno. Estos acuerdos permitieron disponer un nuevo orden de relaciones sobre el convulsionado campo político indígena, alterado por la migración a las pampas de guerreros indígenas y no indígenas enfrentados por la Guerra a Muerte, por una parte, y la ocupación de tierras indígenas más allá del río Salado, por otra.⁹ Rosas establece acuerdos de paz con grupos “pampas”, liderados por Juan Catriel, en el suroeste bonaerense (1827) y con el “llanista” Juan Calfucurá (1841),¹⁰ que en función de este acuerdo se asienta definitivamente en la zona de las Salinas Grandes, en el oeste de la provincia; paralelamente acuerda tratados con los caciques tehuelche-huilliches Chocorí y Cheuqueta, ubicados en la zona del río Limay. Además realiza acuerdos con los grupos de origen borogano que habían sido desplazados de Salinas Grandes por Calfucurá, a los que ofrece instalarse como “indios amigos” en la frontera bonaerense.

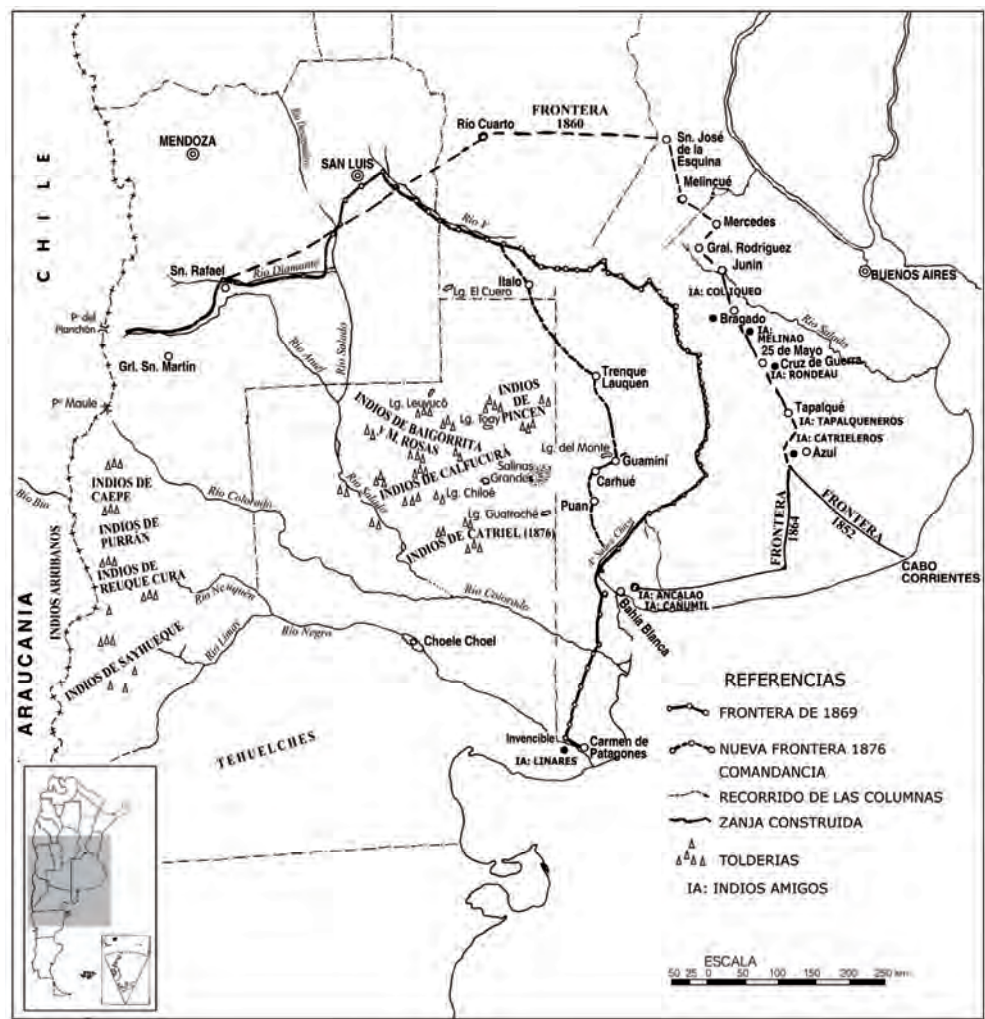
Tales tratos aseguraron las fronteras de las incursiones de grupos provenientes del oeste cordillerano, desarticulando la configuración de alianzas indígenas que resultaba amenazante para los habitantes fronterizos y que impedía el avance poblacional hacia el sur del Salado. Por una parte, los acuerdos con los grupos de Calfucurá y con los huilliches del Limay buscaron probablemente distanciar las alianzas de estos dos caciques, que en la década previa habían participado conjuntamente en malones a las fronteras.¹¹ Por otra, la presencia de Calfucurá en Salinas Grandes permitió a Rosas consolidar la subordinación de los grupos boroganos allí situados, que se rehusaban a romper sus alianzas con los ranqueles, los grupos que más oposición habían mantenido hacia las autoridades nacionales. Finalmente, los boroganos desplazados por Calfucurá pasaron a engrosar las filas de los “indios amigos” que, en tanto tales, aceptaban asentarse en lugares previamente delimitados en la frontera e incorporarse a un régimen de prestaciones militares en defensa de las propiedades fronterizas.

9 El río Salado se había establecido como frontera desde mediados del siglo XVII (ver Cap. 1 de L. Nacuzzi, en este volumen).

10 Juan Calfucurá descendía de la familia de los Curá de la zona de Pitrufrquén, cercana al volcán Llaima, en el departamento de Villarrica, donde permanecieron varios de sus hermanos, ver Hux (1991). Este origen dio lugar a que, en algunas fuentes, sus seguidores fueran denominados “llaimaches”, o “nación Llaimache”; ver Zeballos (1954).

11 Junto a las tolderías de Chocorí se había refugiado Calfucurá ante el ataque de las fuerzas militares enviadas por Rosas en 1838 y posiblemente antes, cuando la Campaña de 1833 buscó reprimir y desarticular aquellos grupos más activos en la actividad malonera sobre las fronteras. La simultaneidad de los pactos firmados por ambos caciques con Rosas a mediados de la década de 1840, indicaría la fuerte alianza que se habían establecido entre ambos grupos, sostenida también por lazos de parentesco (ver Villar/Jiménez 2003).

Mapa 1: Epígrafe: “Caciques y agrupaciones en la Pampa y sector norte de la Patagonia, décadas de 1860-1870”
(elaborado a partir del mapa de Walther, 1974, anexo 5)



El “negocio pacífico de indios” se basaba en la asignación de raciones en ganado en pie y “vicios”, como se denominaba a otros recursos –como azúcar, tabaco, yerba, harina, papel– bajo muy diversas frecuencias y montos, como base de los

acuerdos con los caciques principales, los cuales se comprometían a no invadir las fronteras y a alertar sobre posibles invasiones. Comprendía, en trazos gruesos, tres modalidades de relación que respondían a distintas clases de compromiso por parte de los indígenas que ingresaban al “negocio pacífico”: la primera, integrada por los indios “amigos” o “mansos”, asentados en tierras provinciales cercanas a los fuertes, quienes cumplían diversas funciones, como chasques, baqueanos y –hacia el fin del gobierno rosista– revistaban en las milicias; un segundo círculo integrado por grupos que se acercaban periódicamente a comerciar y que proveían básicamente de información sobre el movimiento de los grupos indígenas en el espacio pampeano; por último, se incluían grupos transcordilleranos, con los cuales se mantenían contactos diplomáticos más esporádicos, que eran reforzados por regalos y obsequios puntuales (Ratto 2007).

Este sistema permitió a Rosas extender su influencia personal sobre un conjunto importante de agrupaciones asentadas en las fronteras y con caciques y grupos migrados recientemente de la Araucanía. Le habilitó un control relativo de las alianzas indígenas –asegurando la fidelidad de algunos caciques bajo el objetivo de obstaculizar las incursiones fronterizas de otros– y en este proceso diversificó los lugares y opciones políticas disponibles para los grupos indígenas en relación al estado. En particular, fortaleció el papel de los “indios amigos” para aquellos caciques que a cambio de recibir raciones aceptaran instalarse con sus seguidores en la línea de fronteras, subordinándose a las autoridades militares y realizando diversos tipos de tareas, que iban desde el empleo en estancias hasta el cumplimiento de funciones de chasques y baqueanos. Este tipo de vínculo comenzó a diferenciarse así de los tratos con “indios aliados” que, aunque se comprometían a respetar las posesiones blancas de la frontera, mantenían su autonomía política y territorial (Ratto 2003; 2007).

Este parece ser, entonces, un primer intento sistemático de intervenir sobre el campo político indígena, destacando algunos caciques amigos y separando parcialidades cuya confederación podía ser amenazante. Los acuerdos de paz sostenidos por raciones periódicas parecen haber sido fundamentales para este ordenamiento hasta finales de la década de 1840. El negocio pacífico de indios implicó así un vínculo sostenido de transferencia de recursos hacia los grupos indios amigos y aliados que fue posible en parte gracias a las expropiaciones realizadas a las estancias de propietarios unitarios opuestos al régimen rosista. Esta política fue creando un marco de relaciones pacíficas que permitió un paulatino avance poblacional sobre las tierras indígenas, incrementó las redes comerciales interétnicas y el prestigio político de algunos líderes indígenas.

La ascendencia creciente del cacique “salinero” Calfucurá no puede desligarse de este lugar como interlocutor de Rosas. Hasta la caída del gobernador en 1852 la entrega de ganado y bienes de consumo al grupo liderado por Calfucurá fue constante y voluminosa. Según los escritos del excautivo e intérprete diplomático San-

tiago Avendaño, la percepción mensual de 2.000 cabezas de ganado equino y vacuno habría posibilitado que el grupo gozara de cierta riqueza y que “no hubiera indio que no tuviera hacienda que cuidar” (Avendaño 1999: 59). Al amparo de sus acuerdos de paz, Calfucurá parece haber dispuesto de un espacio de expansión de su prestigio, vinculado a la posibilidad de redistribuir el flujo de las raciones acordadas en los tratados.¹² En base a estos recursos este cacique pudo ampliar su protagonismo en las relaciones diplomáticas intertribales, construyendo una extensa red de relaciones con los líderes indígenas en distintos espacios: con Catriel y Cachul, los principales jefes que formaban parte del negocio pacífico en la zona de Azul y Tapalqué, con el cacique ranquel Pichuin y los grupos “picunches” del norte de la actual Neuquén (Ratto 2007). Al mismo tiempo, mantuvo sus contactos con las agrupaciones del área cordillerana, donde su hermano Reuquecurá controlaba el paso de Icalma –uno de los principales que comunicaban las Pampas con la Araucanía–, con huilliches del sur neuquino y con grupos arribanos y huilliches de la Araucanía. A través de este cacique, los vínculos de solidaridad militar y económica de los “salineros” con grupos “arribanos” y “huilliches” del territorio trasandino parecen haberse articulado desde estas primeras etapas de instalación de Calfucurá en Salinas Grandes.¹³

El “negocio pacífico de indios” desarrollado hasta 1852 tuvo como efectos indirectos la expansión e intensificación de las alianzas indígenas, principalmente a través del aumento del prestigio político de este jefe salinero, quien en función de sus tratos con el gobierno habría ejercido un rol disuasorio de los ataques de otros grupos, canalizando al mismo tiempo el flujo de los recursos recibidos en forma de raciones hacia otros mercados indígenas y no indígenas de las pampas y la Araucanía. El control de abundantes recursos en sal para comerciar y una hábil diplomacia que combinaba la recepción de raciones con excursiones de saqueo de ganado sostuvo a Calfucurá en el comercio con distintos grupos chilenos al mismo tiempo que colaborando en el mantenimiento de una relativa paz en las fronteras (Jong/Ratto 2008).

12 Siguiendo las cartas de Calfucurá recolectadas en diversos archivos, puede apreciarse un minucioso trabajo de rotación de sus principales caciques aliados –fueran éstos residentes estables en Salinas Grandes o visitantes de la ultracordillera– en la composición de las comisiones indígenas que visitaban el Azul para recibir periódicamente las raciones asignadas por los tratados. Por encargo especial de Calfucurá, los integrantes de estas comisiones recibían además importantes regalos en vestuarios y vicios de parte de las autoridades de frontera.

13 “Las tribus araucanas de Chile mantenían muy buenas relaciones con las del otro lado de la cordillera, particularmente con la gente de Calfucurá: se comunicaban para comerciar y auxiliarse en los malones. Como este cacique recibía del gobierno argentino raciones [...] muchos de este lado se agregaban por algún tiempo a su parcialidad para gozar de estos beneficios” (Guevara 1913: 119-124).

3. La Confederación Indígena de Calfucurá

Pero este ordenamiento entraría en crisis a inicios de la década de 1850. La caída del gobierno de Rosas a comienzos de 1852 inició una década de luchas faccionales por el control del estado entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación de Provincias. Este escenario político desarticuló la política que había mantenido Rosas en las fronteras y abrió nuevas posibilidades de participación a la población indígena de Pampa y Patagonia, esta vez involucrando su capacidad de confederarse para el saqueo en las fronteras.

En este sentido, el desarrollo de la división política y la confrontación militar entre “federales” y “unitarios” parece haber sido un contexto favorable a la mayor experiencia de unidad del campo indígena bajo el mando de Calfucurá (Bechis 1999). A ello colaboraron también las medidas tomadas por el gobierno bonaerense en las fronteras. El cambio de autoridades de frontera, la suspensión de las raciones a las tribus amigas y proyectos de nuevos fortines en asentamientos indígenas provocó la resistencia de muchas tribus amigas y el paso de parte de ellas a las fuerzas de Calfucurá. Este panorama alentaba la concentración de fuerzas en torno a este cacique, quien acompañando a los caciques ranqueles firmó un tratado con Urquiza –líder de la Confederación de Provincias– en 1854, y extendió su convocatoria sobre distintas agrupaciones del área pampeano-norpatagónica. Entre sus seguidores se incluían ranqueles y pampas, así como también las numerosas tribus de Catriel –quien había sido el principal cacique amigo en la frontera bonaerense– y de Yanquetruz –cacique emparentado con Chocorí y Sayhueque– de gran ascendencia entre los tehuelches y huilliches que poblaban las costas del río Negro y las faldas precordilleranas.

En un contexto en el que el avance del ejército de Buenos Aires y la resistencia opuesta por Calfucurá no dejaba lugar para la neutralidad, la llamada “Confederación Indígena de Calfucurá” parece haber obtenido el apoyo simultáneo de distintos sectores indígenas, incluso mediante intentos de sumar por secuestro a las tribus amigas remisas de la frontera bonaerense, como las de Cristo, Rondeau, Guayquil, Garay y Ancalao (Hux 1991). Los numerosos malones de la Confederación Indígena, especialmente a lo largo del año 1855, parecen haber propagado el terror entre los pobladores de la frontera, y a ellos se ha atribuido un retroceso de la ocupación hacia límites previos a los del gobierno rosista.

Pero esta gran convocatoria de Calfucurá respondía también al surgimiento de frentes de conflicto en las distintas jurisdicciones de frontera, relacionados con el cambio del personal militar y el carácter ofensivo asumido por la política del estado bonaerense. Esto se torna evidente cuando el gobierno de Buenos Aires, tras la imposibilidad de impedir las invasiones indígenas a sus fronteras, puesta de manifiesto en sucesivas derrotas del Ejército de Operaciones del Sud, decide retomar los métodos diplomáticos y estabilizar nuevamente las relaciones con los indígenas. El

rápido retorno a las negociaciones por parte de los principales caciques confederados va acompañado de la reemergencia de las situaciones de desavenencia intergrupal previas a la coalición —especialmente entre Yanquetruz y Calfucurá— una vez que el primero reestablece sus relaciones pacíficas con la jurisdicción de Patagones (Levaggi 2000; Vezub 2009). En esta situación, la Confederación Indígena no continuará unida mucho tiempo más: muchos de sus caciques aliados buscarán retomar sus vínculos con distintas jurisdicciones fronterizas. Algunos de ellos, integrados como indios “amigos” en tiempos de Rosas, aspiraban a regresar a este tipo de relaciones con los blancos.

Entre 1856, en que comienza a tomarse contacto con los caciques Catriel y Yanquetruz, y 1861, en que el mismo Calfucurá ingresa a las negociaciones, el Estado de Buenos Aires despliega un persistente y meticuloso esfuerzo para captar políticamente a los sectores indígenas que, liderados por ranqueles y salineros, mantenían fuertes lazos con los sectores federales. Con las negociaciones de paz emprendidas por el Estado de Buenos Aires se inicia una nueva etapa en el “negocio pacífico de indios”, que será la base de la política del estado unificado hasta las mismas vísperas de la ocupación militar de los territorios indígenas. El mapa de indios “amigos” y “aliados” dibujado en la etapa rosista volvía a configurarse, pero el estado daría a este esquema en las siguientes décadas nuevos y más firmes contornos, interviniendo con mayor capacidad en esta plástica capacidad política indígena de confederarse que había logrado, bajo el liderazgo de Calfucurá, mostrar sus aspectos más amenazantes.

A partir de la batalla de Pavón (1861) y el triunfo de Bartolomé Mitre en representación del estado bonaerense, se inició un nuevo período caracterizado por el pacto político-económico entre los sectores dominantes en pugna que, bajo la tutela de Buenos Aires, sostendrían un proceso de unificación política y de consolidación institucional del estado. Las novedades en esta segunda etapa tendrán que ver no sólo con el uso más extendido y sistemático de esta política de tratados al servicio de una lógica a la vez defensiva y ofensiva, sino con cambios en la propia configuración política de la sociedad estatal, que iría a lo largo de las siguientes dos décadas consolidando un orden único por sobre las divisiones internas que hasta el momento la habían caracterizado. Tanto en el este como en el oeste cordillerano las últimas décadas de existencia de la frontera correspondieron al proceso de unificación política y consolidación institucional de los estados argentino y chileno, procesos que habilitarán a estas sociedades las condiciones materiales e ideológicas para ocupar las tierras indígenas y someter a su población. Veremos a continuación las características que asumen las políticas estatales sobre la frontera en esta etapa de unificación y concentración institucional y sus alcances sobre las alianzas al interior y entre los grupos indígenas.

Capítulo 5: Conflicto y diplomacia en la Frontera durante la Organización nacional

1. El Estado en la frontera sur

Enmarcado por la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas en 1852 y el ascenso de Julio Argentino Roca a la presidencia en 1880, el período de “organización nacional” o de “consolidación del estado-nación argentino” refiere para muchos historiadores a una etapa de unificación política que acompañó a la inserción definitiva del país en el mercado capitalista moderno. Este período ha sido considerado indicador del proceso de definitiva institucionalización del poder estatal que transformó los términos de lucha segmental y competitiva de la sociedad republicana para dar lugar al estado unificado como forma dominante y abarcadora de integración social y política (Gorostegui de Torres 2000; Oszlak 2004; Rock 2006). Se ha destacado como rasgo central del proceso la formación de nuevos mecanismos de representación, negociación y control –como el Congreso Nacional, los partidos de la oligarquía y el ejército nacional– que terminarán por desplazar a las alianzas entre las provincias como escenarios del proceso político.

Sin embargo, la resistencia de las formas tradicionales de organización social y ejercicio del poder persistió durante gran parte de este período. Las presidencias de Bartolomé Mitre (1862-1868) y Domingo Sarmiento (1868-1874), pero también la de Nicolás Avellaneda (1874-1880) debieron enfrentar numerosas rebeliones provinciales por la defensa de sus autonomías, amenazadas por la creciente centralización del poder en un estado nacional que a sus ojos se confundía con el propio estado de Buenos Aires (Oszlak 2004). Estas guerras de “montonera” y la guerra contra el Paraguay, en la que Argentina participó junto a Brasil y Uruguay (1865-1870) constituyeron, junto con las fronteras “interiores” con los indígenas de las pampas y el Chaco, los tres frentes de conflicto a los que tuvo que atender –sucesiva y a veces simultáneamente–, este estado-nación en proceso de “consolidación”.

En los abordajes centrados en el sujeto estatal y su consolidación, estos tres frentes han sido frecuentemente vistos como instancias históricas aisladas. Las relaciones mantenidas con las sociedades indígenas han tendido a presentarse como un aspecto marginal al estado y a la conformación de sus instituciones económicas y políticas. Condenados doblemente a su desaparición, los indígenas han sido considerados en las perspectivas historiográficas como meros obstáculos al proceso de consolidación del estado y excluidos como actores del mismo (Jong 2010). En este sentido, la representación de la frontera básicamente como un escenario de “conflicto étnico” ha opacado la consideración de otros aspectos que revelan a una sociedad de fronteras atravesada también por otras contradicciones y oposiciones respecto del avance del estado. Sólo en los últimos años algunos trabajos comienzan a referirse a la frontera como un espacio heterogéneo, no marcado necesaria-

mente por la oposición entre una sociedad indígena y un estado monolíticos, sino mediatizados por agentes y relaciones muy diversas (Quijada 2002; Bonaudo 2005; Tamagnini 2007). Sabemos que en el espacio de las relaciones de frontera no sólo se producían prácticas de control sobre el indígena sino también sobre la población marginal subalterna. La violencia social y la coerción estatal se vinculaban así a la resistencia que se desarrollaba desde sectores no indígenas hacia el orden que el estado nacional buscaba imponer en estos ámbitos. Fue frecuente que estas resistencias se expresaran en movimientos étnicos y políticamente mestizados, como lo fue la activa participación de las fuerzas indígenas ranqueles en el apoyo a los movimientos de las “montoneras” contra el estado central (Tamagnini 2007: 27).

De esta manera, el “problema indígena” o el “problema de la frontera”, uno de los frentes respecto del cual el período de la “organización nacional” adquiere su sentido, constituye una construcción historiográfica que requiere una mayor problematización, apuntando a reconstruir los vínculos existentes en sociedades de frontera *vis a vis* un estado en consolidación, tanto los horizontales –como los que pudieron crearse entre los grupos “rebeldes” y sectores ranqueles en la frontera de Córdoba y San Luis– como los verticales –que involucraron modalidades específicas de ejercicio del poder sobre la población indígena y no indígena–. En la provincia de Buenos Aires, la administración de la frontera habilitó durante estas décadas un espacio de relaciones clientelares ligadas a la disputa por el poder entre los principales sectores políticos dominantes. Estos eran los seguidores de los “nacionalistas” o “liberales”, entre los que se concentraba la burguesía comercial porteña, dirigidos por Bartolomé Mitre, opuestos políticamente a la facción de los “autonomistas” de Adolfo Alsina, que nucleaba a los grandes hacendados del sur bonaerense. La organización político-administrativa de la campaña permitía al gobierno central controlar la elección de los funcionarios civiles de las municipalidades. Los jueces de paz, nombrados por el poder ejecutivo provincial, concentraban una autoridad omnímoda, convirtiéndose en agentes políticos directos de éste.¹⁴

Las autoridades militares, dependientes del ejecutivo nacional, estaban representadas por los jefes y comandantes de frontera, que durante el mandato de Bartolomé Mitre fueron oficiales vinculados al partido liberal –o bien personajes locales adherentes a su política a los que se confirió grados militares– que hallaron en estos espacios un amplio margen para consolidar su poder personal y capitalizar a su favor la autoridad otorgada por el gobierno nacional. Estos funcionarios tenían bajo

14 Según la Ley del 16 de octubre de 1854 estos funcionarios eran nombrados por el ejecutivo provincial, a partir de una terna propuesta por la municipalidad y presidida por el mismo candidato. Los jueces de paz concentraban las funciones de policía, justicia, beneficencia, escuelas primarias y recaudación de rentas. Recién en 1877 quedaría sancionada una nueva Ley que separaba las funciones de policía y volvía el cargo de juez de paz dependiente del sufragio de los pobladores de los municipios (Barba 1982: 78-85).

su responsabilidad organizar la defensa de cada jurisdicción de frontera en base a las escasas fuerzas del ejército nacional, disponiendo el reclutamiento periódico de pobladores de los distritos de frontera para la Guardia Nacional.¹⁵

La defensa contra el indio se organizaba bajo “una ineficacia calculada” (Halperín Donghi 2005: 128; Peña 1975; Jong 2008) para aumentar los lucros de quienes la controlaban. No fueron pocas las denuncias sobre la corrupción en la administración de las partidas para la alimentación, armamento y racionamiento de las tropas, guardias nacionales e indios amigos por parte de proveedores y oficiales del ejército. Al controlar las condiciones de reclutamiento y obediencia de la población rural y concentrar las relaciones con los indios amigos, los jefes de frontera disponían de un amplio margen de manipulación política. Constituyeron así actores cuyo espacio de poder se generaba y reproducía en paralelo al mantenimiento de la existencia de la administración fronteriza. De esta manera, muchos de estos personajes continuaron ejerciendo funciones en las fronteras una vez finalizado el período presidencial de Mitre, convirtiéndolas en espacios de reproducción de su influencia política.¹⁶

Estos funcionarios y espacios de poder estrechamente vinculados a la existencia de una administración fronteriza nos hablan de una dimensión de la actividad del propio estado que aún permanece en gran medida desconocida. Ignorar estas dimensiones de acción estatal no sólo empobrece la comprensión de las dinámicas propias de la sociedad nacional sino que conduce a simplificar la contraparte indígena en dichas prácticas políticas y a desconocer un amplio arco de trayectorias, estrategias e intencionalidades de líderes e intermediarios que debieron moverse en el ambiguo terreno de dos legitimidades políticas. La negociación y los pactos diplomáticos adquirieron en la política estatal de fronteras el peso estratégico que suplía el escaso número y formación del ejército nacional. Indudablemente, al mismo tiempo, formaron parte de una estrategia indígena en las fronteras en la que la práctica de los tratados había rendido buenos frutos. Pero considerado como dispositivo de poder del estado, esta práctica diplomática presenta características

15 El presidente Mitre organizó un ejército regular en 1864, pero pasarían muchos años hasta que la institución militar lograra consolidarse. La capacidad de convocatoria militar, a través del reclutamiento en las Guardias Nacionales, continuó en manos de las provincias. Ello explica la facilidad con que los caudillos provinciales organizaron ejércitos y recurrentemente se alzaron contra la autoridad central (Oszlak 2004: 106).

16 Esta situación, según las denuncias de Barros (1975, Morales (1868, en Peña 1975) y las descripciones de Ébélot (1968), mantenía a los pobladores reclutados como Guardias Nacionales en una condición miserable. Carecían del vestuario y el alimento necesarios para soportar el rigor de los inviernos, así como de las armas y animales de montura requeridos para la defensa de las fronteras. Era común que gran parte de estas fuerzas hubieran cumplido ya el doble de tiempo que era obligatorio en el servicio y que se les adeudaran varios meses de sueldos. Las deserciones eran frecuentes y se penaban con la prisión o la muerte.

nuevas, dadas básicamente por su expansión en el campo indígena y su efectividad al servicio de una política claramente orientada hacia el avance fronterizo.

Para la reconstrucción de la política de tratos pacíficos entre 1856-1878, recurrimos a diversos corpus de documentos, básicamente a documentación surgida de las comandancias de frontera y las Memorias del Ministerio de Guerra durante las décadas de 1860 y 1870, a partir de la cual pueden reconstruirse, aunque fragmentariamente, los intercambios epistolares entre caciques indígenas y jefes de las principales jurisdicciones de frontera, y entre éstos y el ministerio de guerra. Gran parte de los tratados de paz firmados en este período pueden encontrarse en estos fondos. Fueron una base fundamental los trabajos de Abelardo Levaggi acerca de los tratados de paz en las fronteras de la Pampa y del Chaco durante los siglos XVIII al XIX y las biografías de caciques realizadas por el Padre Meinrado Hux, obras que nos orientaron y permitieron acceder a mucha de la información que aquí presentamos.

En este capítulo nos interesa caracterizar esta doble faz de un proyecto político de ocupación de las tierras pampeano-patagónicas, basado en el uso de la diplomacia como complemento de la acción militar, como forma sutil de intervención y orden en la sociedad indígena. Por ello, no contemplaremos aquí el análisis de las posiciones y formulaciones alternativas a la política predominante del estado durante este período, que apuntaron a idear y sostener formas pacíficas de integración como productores, propietarios y ciudadanos de las poblaciones indígenas. Muchas de ellas constituyeron posturas claramente opuestas al avance militar y al sometimiento de la población indígena. La asimilación y el exterminio formaron parte de una amplia gama de posiciones sobre la cuestión indígena, cruzadas por intereses regionales y pertenencias políticas. Los diversos “diagnósticos” y “soluciones” del “problema de las fronteras” constituyeron materia susceptible de manipulación, en los cuales encontraron espacio disputas y enfrentamientos nacidos en otras arenas de conflicto. Una de aquellas se vinculó al uso futuro de la tierra y el perfil de la estructura de propiedad que caracterizaría los territorios a ocuparse. Como bien lo muestra el debate por la Ley de Tierras Públicas de 1875, los sectores que promovían la agricultura como base del desarrollo productivo pampeano alentaban la subdivisión de la tierra para favorecer la pequeña propiedad y la colonización, viendo en estas medidas un camino para la extensión progresiva de las fronteras. También concebían para las poblaciones indígenas una inserción futura como pequeños productores, pero era descartada por aquellos que defendían el desarrollo ganadero con base en la gran propiedad, quienes restando importancia a las acciones de colonización, postulaban la necesidad de una solución militar al tema indígena (Jong 2010: 163). Por otro lado, no fueron pocos los proyectos surgidos desde los mismos ámbitos de frontera, que demuestran hasta qué punto las relaciones abiertas por el régimen de “indios amigos” permitían concebir la incorporación plena de estas poblaciones como proveedores de frutos y mano de obra a la economía pampeana.

Pero, como demuestra Halperín Donghi, la aparente crítica a la política indígena seguida por el estado se acercaba en estos planes a sus mismos propósitos, en tanto apuntaban a redefinir los términos de la subordinación de estas poblaciones para adaptarlos al funcionamiento del orden socioeconómico proyectado por el sector étnico dominante (Halperín Donghi 2006: 386).

2. “Entretener la paz para avanzar las fronteras”: la década de 1860

Los primeros pasos en la política de tratados de paz pos-rosista fueron dados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de las derrotas militares sufridas por el Ejército de Operaciones del Sud a manos de las fuerzas aliadas de Calfucurá y Catriel en el año 1855. Se volvía necesario reestablecer las relaciones pacíficas con aquellos sectores indígenas que tradicionalmente habían acordado con Rosas en la frontera de Buenos Aires y restar así el apoyo indígena a Calfucurá, cuya convocatoria estaba siendo capitalizada por la Confederación de Provincias. Se comienza entonces por recuperar las relaciones con el principal referente de los grupos amigos del sur de la provincia, Juan Catriel, a quien se le ofrece un tratado de paz que le permitía retornar a sus tierras y que incluía su nombramiento como “Cacique Mayor y Comandante General de las Pampas”, con sueldo mensual, grado de general y uso de charreteras de coronel. Juan Catriel, cuyo padre –Catriel el Viejo– ya había entrado en tratos pacíficos con el gobierno bonaerense en 1827, miraba con preferencia la opción de volver a vivir en la frontera. Su retorno a las tierras cercanas a Azul es acompañado en los años inmediatos por otros grupos y caciques emparentados que se ubican en las tierras cercanas de Tapalqué, engrosando así un núcleo de población indígena que superaba ampliamente a los cristianos de estas localidades.¹⁷

Desde Carmen de Patagones se inician paralelamente tratativas con Yanquetruz, con quien se firma un tratado en 1857. En este tratado se nombra al cacique “Comandante en Jefe de todo el territorio de la Pampa que es adyacente a la jurisdicción de Patagones”, incluyendo a los principales caciques del sur neuquino, comprometiéndolo a ceder trece leguas de territorio a la provincia de Buenos Aires, defender las costas marítimas del Atlántico ante una incursión extranjera y apoyar militarmente cualquier intento de exploración u ocupación nacional del curso del río Negro. Yanquetruz muere en un confuso episodio al año siguiente, pero se intenta rápidamente renovar el tratado en 1859 con su hermano Benito Chingoleo, mejorando los términos ofrecidos en el tratado anterior. Este cacique cumplirá en

17 Durante gran parte del siglo XIX, en esta región las tribus amigas parecen haber superado ampliamente a la población “criolla”. En base a censos provinciales, se ha calculado la existencia de 2.650 indígenas para 1836 y cerca de 6.000 indígenas para 1854. Hacia 1870, el viajero Armaignac estimaba en 4.000 personas y 1.500 “lanzas” –hombres de guerra– la población indígena asentada en la zona de Azul y Tapalqué (Lanteri/Pedrotta 2007).

los primeros años de la década de 1860 un estratégico papel de intermediario diplomático, acercando a Patagones a los caciques Paillacán, Huincabal, Chagallo, Sinchel y Colohuala, que habitaban las márgenes del río Negro y las faldas cordilleranas, para negociar tratados de paz. Aunque no todos se concretaron, apuntaban a disuadir a estos caciques de futuros apoyos a las invasiones que Calfucurá realizara en las fronteras (Levaggi 2000).

Los esfuerzos de Buenos Aires se dirigieron asimismo a captar el apoyo de caciques ranqueles más cercanos a las fronteras de San Luis y Córdoba, que se hallaban bajo tratados con Urquiza. En 1858 se entrega una copia del tratado realizado con Yanquetruz al unitario Baigorria, líder de los ranqueles, para invitarlo a entrar en tratos similares. Si bien no prosperan inmediatamente, estas tratativas tienen sus resultados a largo plazo, cuando el cacique Ignacio Coliqueo, hasta el momento seguidor de Urquiza, inclina su apoyo al Estado de Buenos Aires, asentándose en la frontera oeste y constituyendo desde entonces uno de los principales caciques “amigos” del período. Este cambio de alianzas de quien había sido cacique segundo de la Confederación Indígena parece haber repercutido directamente en la conducta de Calfucurá, quien a través de la intermediación de Catriel con el Comandante de Azul, acuerda en 1861 un tratado de paz que lo compromete, nuevamente como “aliado”, a no atacar las fronteras de Buenos Aires y a alertar sobre invasiones.

Estos cambios en el alineamiento de las alianzas intra e interétnicas resultantes del retorno de la política de tratados no implican necesariamente una ruptura definitiva de relaciones entre los sectores indígenas previamente confederados por Calfucurá, pero sí la inauguración de ámbitos de negociación independientes con el gobierno. En estos primeros años, y hasta 1865, cuando se formaliza un primer tratado entre los caciques ranqueles y el gobierno nacional, tanto éstos como los salineros mantendrán alianzas dispares –con las montoneras provinciales los primeros y con el gobierno nacional en la frontera bonaerense los segundos–. Esta divergencia entre los dos principales grupos que habían protagonizado la Confederación Indígena tendrá consecuencias en la estabilidad de las fronteras. Calfucurá intenta en estos años cumplir sus pactos y fortalecer sus vínculos con los jefes de frontera de Azul y Bahía Blanca. Estas jurisdicciones del sur bonaerense, donde negociaban y se abastecían los salineros, se mantendrán en estos años libres de los grandes malones de la década anterior. Mientras, las fronteras de Córdoba recibirán los ataques de los ranqueles, quienes actuarán en estrecho vínculo con las fuerzas montoneras y a los que se sumarán en ocasiones caciques “de Calfucurá”.

La presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868) se inicia así bajo un panorama de expansión de vínculos “pacíficos” con los principales sectores y caciques indígenas de la Pampa y norte patagónico. Se había retomado una política que había dado pruebas de su efectividad en la época de Rosas y que ya constituía un método de negociación política conocido por ambas partes. Establecidos los tratados con

los principales representantes indígenas, el gobierno de Mitre continúa esta política apuntando a extender la oferta de tratados a nuevos caciques de menor jerarquía o situados en territorios más alejados de la frontera. Los tratados con Huincabal y Sinchel (1863), Chagallo Chico (1863), Najpichún (1864),¹⁸ Francisco (1865),¹⁹ Andrés (1865),²⁰ Casimiro (1866)²¹ y Quiñifero (1867)²² avanzaron en la integración a los tratos pacíficos sobre las poblaciones al sur del río Negro, orientando el apoyo indígena hacia el resguardo de la soberanía y colonización de los territorios patagónicos. Sobre las faldas cordilleranas el cacique Sayhueque encuentra en estos tratos una vía para consolidarse como representante de los “manzaneros”. Este cacique del sur cordillerano neuquino, que se hallaba integrado al tratado que Chingoleo firma luego de la muerte de Yanquetruz (1859), renueva en 1863 sus vínculos con el gobierno bajo posteriores tratados que revelan su ascendencia como jefe de las tribus del Limay.

Desde Carmen de Patagones se prosigue la captación de nuevos caciques para la firma de tratados a través del indio amigo Miguel Linares, quien sucede a Benito Chingoleo luego de su muerte, en 1865. Linares continuará con su función de articulador con los caciques de la Cordillera y de la línea del río Negro hasta fines de la década de 1870, intermediando en la firma de nuevos tratados con los caciques pehuenches del centro y norte de las faldas cordilleranas: en 1868 ya figuran en las listas de racionamientos los caciques Queupumé, Purrán y Huincaleu. A partir de 1870 se racionará desde Patagones a un número mayor de caciques, entre los que encontramos bajo la renovación de tratados a Purrán, Llancaqueo y Ayllal (1872) y a Quempil y Jaucamil (1872), Ñancucho (1872), Reuquecurá (1873), Melicurá (1875), Quempumil, Llancamil y Guenupil (1875), Maripán (1875), entre otros (Raone 1969; Levaggi 2000).

Las alianzas que estableció el emergente gobierno nacional fueron tomando así la forma de una red, en la que algunos caciques destacados por estas relaciones funcionaron como intermediarios para sumar a nuevos aliados, hasta cubrir gran parte del mapa político indígena. Los principales caciques amigos en las fronteras serán actores fundamentales de las relaciones entre el gobierno y los indios de “tierra adentro”. Juan Catriel y luego su hijo Cipriano, desde la zona de Azul y Tapal-

18 Servicio Histórico del Ejército (en adelante, SHE), Caja 15, 775.

19 SHE, Caja 22, 4086, en Levaggi (2000: 350-352).

20 En agosto de 1865 se le envía al teniente coronel Julián Murga las bases para realizar tratados con el Cacique Andrés y los demás que lo acompañan. SHE, Caja 17, 3064.

21 SHE, Caja 19, 887, en Levaggi (2000: 353-355).

22 Quiñifero, cacique de los Quirquinchos “de mucha influencia en la costa del río Negro”, según el comandante Murga, quien ofrece permanecer en la segunda angostura del río Negro para vigilar y estar a las órdenes de la comandancia cada vez que fueran necesarios sus servicios. Aunque no se ha encontrado el documento, el tratado estaba a punto de celebrarse en marzo de 1867, con base en los términos del tratado de Chingoleo. SHE, Caja 19, 892.

qué; Ancalao desde Bahía Blanca, Coliqueo en las cercanías de Bragado, en el oeste bonaerense, y Linares en Patagones ocuparon un espacio político ambiguo y fluctuante, obteniendo compensaciones por su apoyo militar en defensa de las fronteras, constituyendo emisarios imprescindibles en las negociaciones con los indios de tierra adentro. Estos caciques fungieron como intermediarios diplomáticos, estrategia que demuestra que los agentes del estado conocían las redes de afinidad y competencia entre los segmentos de la población indígena, y que apuntaban a influir en las mismas. En este sentido, había por parte del gobierno una intención clara de disminuir y fragmentar las fuerzas reunidas bajo los caciques más poderosos. En palabras de Juan Cornell, teniente a cargo de las “tribus amigas”:

Es de presumirse, Sr. Ministro, que a estos caciques se seguirán otros con iguales demandas que a primera impresión se tendrán en vista los gastos enormes que considerados serán nada en proporción de *lo que se gana entreteniéndolo la paz mientras se va conquistando la tierra*, que se hace útil formando pueblos y aumentando la riqueza del país. Por eso es que yo juzgo que está en los intereses generales de la Nación y principalmente en los del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el admitir la separación e independencia de cada uno de los caciques del dominio de un Jefe principal sea Calfucurá u otro para atraerlos a ser súbditos del Gobierno nacional aunque para ello sea preciso hacer algunos gastos de más de los que se hacen.²³

Estos consejos eran acordes al rumbo de la política indígena del estado. Desde las jurisdicciones de Bahía Blanca, Azul y Tapalqué fueron gestionándose tratados de paz con diversos caciques cercanos a Calfucurá, quienes se acercaban a las fronteras para formalizar tratados particulares. Uno de ellos fue Millacurá, un hijo de Calfucurá, quien desde 1858 aparece racionado junto a Catriel y Cachul. Le sigue su cuñado Ignacio, admitido a fines de 1862 como indio amigo en el Fuerte Argentino de Bahía Blanca. En los siguientes años se incorporan Cañumil (1865) y Guayquil (1866) a Bahía Blanca y Manuel Grande (1864) y Quentriel (1866) —quien había sucedido a Coliqueo como cacique segundo de Calfucurá— en Tapalqué (Jong 2007).

De esta manera, mientras que en función de estos tratados algunos grupos fueron perfilándose como sectores de población con una más clara demarcación territorial y con representantes políticos más jerarquizados y estables, en el caso de Calfucurá registramos un impacto diferente. El ingreso a los tratados de paz significó para este líder indígena un desgranamiento de su jefatura, la separación de sus caciques más importantes y cercanos, que independizaron de éste sus “negocios” con el gobierno. Probablemente porque las raciones acordadas en el tratado con

23 Carta de Juan Cornell al ministro de Guerra Juan Andrés Gelly y Obes, 10/11/1863, SHE, caja 12, 699, énfasis nuestro.

Calfucurá eran notablemente menores a las percibidas durante el período rosista,²⁴ los “tiempos de paz” parecen haber limitado su autoridad como líder en gran escala y, hasta cierto punto, haberla condicionado en relación a sus caciques aliados más inmediatos.

En forma paralela a esta oferta de tratados, que continuó activa durante el resto de la década, fueron perfilándose desde el estado diversas acciones de avance fronterizo. Ya en 1864 el general Wenceslao Paunero elabora a pedido del Ministerio de Guerra y Marina dos proyectos de avance fronterizo que suponían la ocupación de las tierras de asentamientos de salineros y ranqueles y su expulsión a la margen sur del río Negro.²⁵ A mediados del mismo año se dispuso la creación de un nuevo fuerte —el “9 de Julio”— en la frontera del oeste bonaerense y en 1865 la expansión de la línea de fortines sobre diez nuevos distritos (Raone 1969).

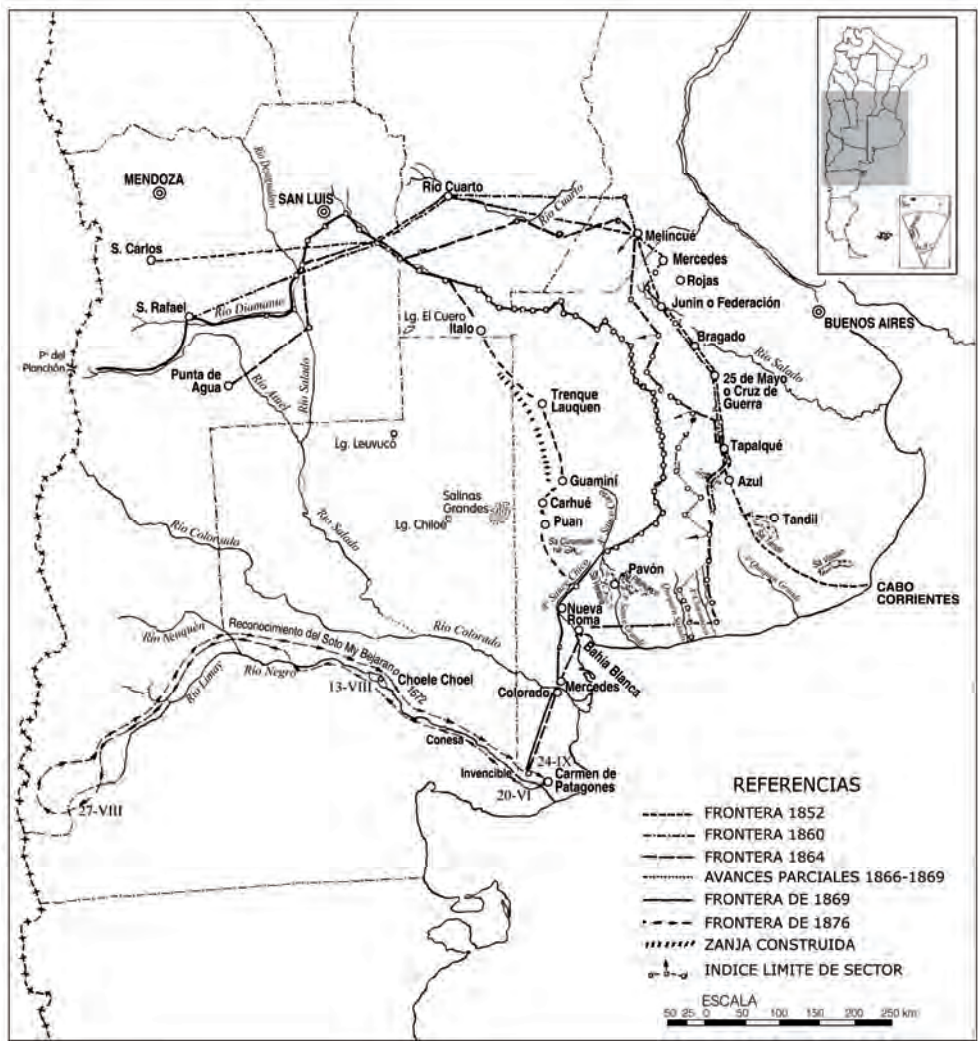
En los años siguientes se va definiendo en el ámbito legislativo el camino para la ocupación definitiva del territorio indígena: en 1867 fue sancionada la Ley 215 de adelantamiento de las fronteras hasta el río Negro.²⁶ Sin embargo, los intentos de concretar este objetivo serán parciales e intermitentes a lo largo de los siguientes diez años. Ello se vinculó, entre otros factores, a los diversos frentes de conflicto, entre ellos las montoneras y levantamientos provinciales que se sucedieron hasta 1876 y la Guerra del Paraguay (1865-1870), que implicaron el desplazamiento de los recursos militares de las fronteras. Por ello, creemos que es posible entender la política de tratos pacíficos mantenida por el estado nacional como una práctica que integró y sostuvo los proyectos de avance fronterizo.

24 Aunque no se ha encontrado en los archivos ejemplares del tratado firmado por Calfucurá con el Gobierno de Buenos Aires en 1861, según la referencia del Teniente Coronel a cargo de las comisiones de indios, Juan Cornell, este cacique recibía trimestralmente —y ya no mensualmente— “dos mil yeguas y los artículos de ración para distribuirlos a sus tribus”. Juan Cornell al Ministro de Guerra y Marina Juan Gelly y Obes, 10/11/1863, SHE, Caja 12, 699.

25 El de mayor alcance contemplaba la partida de cinco columnas militares desde distintas jurisdicciones fronterizas, que avanzarían hacia el sur arrojando a la población indígena insumisa a la margen sur del río Colorado (Walther 1974: 320).

26 Estrechando los objetivos de modalidades pacíficas de integración y reconocimiento de derechos territoriales de los indígenas contemplados en sus primeras redacciones, la versión sancionada de esta Ley terminó por privilegiar la vía militar de ocupación de estos territorios (Navarro Floria 2004: 535).

Mapa 2: Epígrafe “Movimiento en la Frontera Sur, 1852-1876”
(elaborado a partir del mapa de Walther, 1974, anexo 6)



Volvemos así a la concepción expuesta por Cornell acerca del objetivo de “entrete-
ner la paz” con los tratados, mientras “se va conquistando la tierra”. El uso de los
tratados de paz como medios diplomáticos no implicó necesariamente que estos
representaran el horizonte a alcanzar en la relación con los indígenas. De hecho,
veremos que la negociación y firma de tratados se prolongará hasta las vísperas
mismas de la conquista militar del “desierto”, acompañando los avances fronterizos

que precedieron esta campaña: entre ellos la fugaz ocupación de la isla de Choele Choel en 1868, el avance de las fronteras de Buenos Aires a cargo del Ingeniero Czetetz en 1869, la nueva expedición a Choele Choel en 1870, la expedición de Ignacio Rivas a Salinas Grandes en 1874 y la ocupación de Carhué y la fundación de los fuertes de Puán, Guaminí y Trenque Lauquen por el ministro de Guerra Adolfo Alsina en marzo de 1876. Estas medidas fueron impuestas –en tanto no se derivaron de una negociación con los ocupantes de estas tierras– y efectuadas en contra de los declarados intereses de los caciques y grupos indígenas con los que se mantenían tratados.

Además de medidas de avance militar de las fronteras, el estado fomentó el poblamiento de estos territorios, especialmente en la línea del sur y oeste bonaerense.²⁷ La presencia de importantes contingentes de indios amigos no fue ajena en esta expansión poblacional; no sólo por la protección que su presencia implicaba ante la amenaza de malones de otros grupos, sino por su participación en el comercio de cueros –en el que participaban indios amigos, indios de tierra adentro y comerciantes no indígenas– y como trabajadores estacionales en establecimientos rurales (Ébélot 1968; Barros 1975).

De esta manera, hacia fines de la década de 1860 gran parte del mapa político indígena en Pampa y Patagonia se hallaba bajo acuerdos pacíficos, manteniendo relaciones comerciales y recibiendo raciones desde diversos puntos de la frontera. Una población cada vez más importante de indios amigos facilitaba –no sin conflictos– el proceso de ocupación de nuevos territorios realizados por pobladores y militares. Sólo algunos de estos sectores reaccionarían ante los avances de frontera, pero su capacidad de resistir por la fuerza o la negociación de este proceso de ocupación sería cada vez más limitada. Veamos qué dinámicas se producen a partir de este proceso de ofensiva territorial del estado y de resistencia indígena.

Los primeros avances fronterizos afectaron especialmente las relaciones pacíficas sostenidas con el cacique Calfucurá desde la firma del tratado de 1861 (Hux 1991). Al difundirse el proyecto de Paunero, en 1864, ranqueles y salineros habían amenazado con atacar las fronteras, lo que termina concretándose a fines de ese año con la invasión a la frontera de Córdoba por fuerzas combinadas de indios pampas, de Calfucurá y “chilenos”.²⁸ El gobierno ofrece entonces un tratado a los ranqueles de Baigorrita y Mariano Rosas, que se firma en Río Cuarto en 1865 y establecía en una de sus cláusulas el compromiso de tratar a Calfucurá y sus india-

27 Entre 1858 y 1876 se pusieron en arriendo un total de más de cinco millones de hectáreas, de las cuales 3.861.913 –el 77%– correspondieron a contratos en el exterior de la frontera, que no pagarían el arriendo hasta tanto el avance de la línea no los incluyera (Barsky/Djenderedjian 2003).

28 SHE, Caja 15, 2728 y 787: En diciembre, desde Río Cuarto se informa que los invasores se conformaban en parte por indios de Calfucurá, otra por indios chilenos y veinte cristianos, comandados por el cacique chileno Curín, junto a Culuil, Pablo y Guichangar.

das como enemigos.²⁹ Pero este tratado no duraría más que algunos meses, ya que un nuevo avance de las fronteras, a partir de la creación de diez nuevos partidos sobre la provincia de Buenos Aires, sería resistido por ranqueles, salineros y aliados. Sabemos que Calfucurá convoca al cacique Trecán, de Valdivia, quien cruza la Cordillera junto a 2.000 indios “chilenos” (Hux 1991). Probablemente estos grupos son los que participan en un malón a la frontera de Córdoba encabezado por el ranquel Baigorrita e indios “chilenos” en noviembre de 1865.³⁰ A fines del mes siguiente, las invasiones se habían desplazado desde Córdoba hacia la frontera oeste y sur de Buenos Aires, involucrando también a indios de Catriel.³¹

El seguimiento de este proceso nos muestra al líder de los salineros intentando preservar las vías de negociación para la resolución de este conflicto. Calfucurá había amenazado en un principio con invadir junto a sus aliados venidos desde Chile, pero luego anuncia al comandante de Azul las fechas y zonas que serían invadidas. El comandante de Azul, Benito Machado, acusando a Calfucurá de mandar a su gente a invadir e intentando forzar al cacique salinero a renovar los términos de su tratado de paz, decide retener en enero de 1866 la comisión que iba desde Salinas Grandes a retirar las raciones trimestrales.³² Calfucurá comunicó que mandaría llamar en su apoyo a indios “chilenos” y de la Cordillera, y que contaría también con las fuerzas de ranqueles e indios de Catriel.³³ En poco tiempo se produjo un malón sobre Tres Arroyos, donde se había adelantado la frontera en cuarenta leguas (Hux 1991). Hacia mediados de 1866, los partes militares de Álvaro Barros –sucesor de Machado en la Comandancia de Azul– transmiten que Calfucurá anunciaba la llegada a Salinas Grandes de 3.000 guerreros –en documentos posteriores habla de 1.500– de su hermano Reuquecurá desde la Cordillera, acompañado por los caciques Paillacán y Cayupán, y 500 “chilenos”.³⁴ Gracias a las gestiones de Barros, esta amenaza de invasión conjunta logró ser reorientada hacia la gestión y renovación de tratados de paz. En octubre de 1866 se firmaba un nuevo

29 Si bien tiene vigencia sólo durante unos meses, éste continuará siendo uno de los objetivos centrales en el siguiente tratado, negociado en 1870 (Pérez Zavala 2007).

30 SHE, Caja 18, 3217.

31 Según Machado, participó en ellas un número considerable de los de Calfucurá. SHE, Caja 19, 854.

32 Los intereses creados en base a la administración de las raciones daban lugar a importantes ganancias en las que intervenían proveedores y hasta jefes del ejército. Según el coronel Álvaro Barros, en aquellas circunstancias subordinado del coronel Machado como Jefe 2º de la frontera Costa Sud, éste había recibido aviso de Calfucurá sobre las invasiones que preparaban chilenos y ranqueles, pero había silenciado la información y mantenido inmóviles las tropas con la mira de forzar a Calfucurá a la realización de nuevos tratados bajo su supervisión. El coronel Machado fue acusado a raíz de este incidente por manejos fraudulentos de las raciones y destituido temporalmente de su cargo (Barros 1975).

33 *Ibidem*.

34 Carta de Álvaro Barros al Ministro de Guerra Julián Martínez, 22/8/1866. SHE, Caja 20, 3588 y 893.

tratado de paz con Calfucurá y un primer tratado con Reuquecurá, una vez más en los toldos de Juan Catriel, quien participó como articulador diplomático del proceso. A su vez, durante el desarrollo de estas negociaciones arriba al Azul una comisión de 400 indios liderada por Sayhueque –quien ya mantenía un tratado por Patagones– pidiendo renovar su tratado en base a raciones trimestrales en vez de anuales, equivalentes a las otorgadas a Reuquecurá y Calfucurá.

En esta coyuntura se pone en evidencia las potencialidades de competencia y alianza que se mantenían aún en latencia en el mapa político indígena. El conflicto provocado por la suspensión de raciones y el apresamiento de los comisionados de Calfucurá parece haber sido reorientado por los jefes indígenas y las autoridades militares de frontera hacia la continuidad de los tratos pacíficos. Pero este acuerdo requirió la demostración de fuerza de Calfucurá y sus principales aliados, los indios cordilleranos movilizados por Reuquecurá, algunos caciques ranqueles y el apoyo implícito del cacique “amigo” Juan Catriel. A su vez, la presencia de Sayhueque nos sugiere que la posibilidad de acción conjunta entre huilliches cordilleranos y salineros podría haberse concretado de no acceder el gobierno a la firma de tratados, posibilidad de acción conjunta que cada cacique de cierta representatividad utilizaba para negociar en términos más convenientes con el gobierno.³⁵

Pero la paz convenida con los caciques salineros y cordilleranos a fines de 1866 volverá a entrar en crisis a mediados de 1868, cuando el presidente Mitre dispone la ocupación de la isla Choele Choele –punto central en el recorrido de los ganados comercializados hacia Chile– con fuerzas dirigidas por el comandante Julián Murga, de Carmen de Patagones. Esta medida preveía la creación de una línea de ocupación que se extendería por el río Colorado hasta la Cordillera (Raone 1969: 24). La reacción de los salineros fue inmediata: Barros transcribe algunas de las cartas enviadas por Calfucurá y su sobrino Bernardo Namuncurá, anunciando que se había mandado llamar nuevamente a las fuerzas de Reuquecurá en su apoyo, aclarando que “si se retiran de Choele-Choele no habrá nada y estaremos bien, pero espero usted me conteste y me diga de asuntos de los señores ricos y jefes y del señor gobierno” (Barros 1975: 79-80). En abril de 1869, Calfucurá reitera su amenaza, anunciando el inminente arribo de su hermano Reuquecurá con 3.500 lanzas. El cacique también anuncia los éxitos militares de los caciques arribanos Quilapán, Calfucoi, Marihual y Calfuén contra el ejército chileno, y los planes de éstos de cruzar la Cordillera con 3.000 de sus guerreros. Estas no pasaron de ser amenazas de invasión, en parte porque el recién electo presidente Sarmiento había decidido retirar las tropas de la isla.³⁶

35 De hecho, este cacique logró obtener del gobierno, en esta ocasión, un incremento en las raciones periódicas percibidas (Vezub 2005).

36 Esta tentativa de ocupación de la isla permitió, sin embargo, adelantar en 160 km la línea de fronteras sobre el río Negro, con la fundación del Fuerte Conesa (Raone 1969: 26).

La presidencia de Sarmiento (1868-1874) reforzará los objetivos de ocupación territorial y alentará un uso más pragmático de la política de tratados. El ministro de guerra Martín de Gainza elabora un nuevo plan de avance sobre los cuatro puntos centrales de abastecimiento de pastos y aguadas en las pampas: Choele Choel, Salinas Grandes, Leuvucó y Poitahue, teniendo como objetivos centrales el sometimiento de salineros y ranqueles. El plan incluía el avance de columnas desde Mendoza y la frontera oeste bonarense, con el apoyo de las indiadadas mansas de Ancalao en Bahía Blanca. Contaba también con la presencia del cacique huilliche “chileno” Lemunao, que por un tratado de paz firmado en 1869, se encontraba instalado en las cercanías de la isla. Este tratado –que revela la intención del gobierno argentino de intervenir sobre las conexiones salineras con los huilliches del sur de la Araucanía– adjudicaba al cacique Lemunao terrenos en “El Chichinal” –a veinte leguas de la isla Choele Choel–, encargándole la vigilancia del paso y el aviso de cualquier intento de invasión. Se lo condicionaba asimismo a no reconocer ningún dominio ni autoridad en los caciques Calfucurá y Reuquecurá, ni en ningún otro cacique natural del país, o de Chile, considerándolos en adelante “súbditos argentinos” (Levaggi 2000: 427-433).

A la vez que se intenta incorporar más caciques a los tratados, el cumplimiento de los mantenidos con los salineros se debilita y las raciones comienzan a demorarse. Similares restricciones alcanzan también a los indios amigos de Coliqueo y Catriel en la frontera oeste y sur (Hux 1991). A mediados de este año se inicia un nuevo adelantamiento de la línea de fronteras con una nueva línea de fortines que unía el sur de Córdoba y Santa Fe con el oeste y sur de Buenos Aires, privando a los indios de las principales aguadas que servían de puntos de apoyo en sus invasiones.³⁷ Esta operación fue paralela al adelantamiento de la línea de fronteras realizada en Córdoba, desde el río Cuarto al río Quinto, sobre territorio ranquel. Lucio V. Mansilla, comandante de Río Cuarto, promueve en 1870 un tratado con los caciques Mariano Rosas y Baigorrita, buscando obtener el consentimiento indígena sobre este avance territorial y evitar las posibles represalias.³⁸

Será entonces en los intersticios de estos avances fronterizos donde la política de tratos pacíficos probará su eficacia al servicio de la desarticulación de la resistencia indígena; por un lado, aislando con más sistematicidad a las fuerzas de Calfucurá y de los ranqueles de otros potenciales aliados en ambos lados de la cordillera de los Andes; por otro, forzando a estos mismos grupos a aceptar los avances parciales de frontera en las nuevas instancias de negociación; finalmente, y a partir

37 Informe del coronel de Ingenieros Juan F. Czetzy al Ministro de Guerra Martín de Gainza, SHE, Caja 31, 18^a-5620.

38 Este tratado finalmente no se cumple. El congreso se niega a ratificarlo por establecer líneas de fronteras distintas a la dispuesta por la Ley 215 de 1867. La remoción del general Mansilla, principal interlocutor en la gestión del tratado, tampoco colaboró a ello (Tamagnini/Pérez Zavala 2002; Pérez Zavala 2007).

de la apertura de negociaciones paralelas con distintos caciques, provocando procesos de fragmentación política interna al interior de estos grupos.

3. Éxitos y fracasos de una estrategia diplomática: la década de 1870

Como vimos en la sección anterior, las principales líneas de alianza política indígena en confrontación con el estado articulaban a los grupos ranqueles y salineros, y a estos con los “chilenos”, principalmente “arribanos” o “muluches” que se hacen presentes en las pampas para intercambios comerciales y/o para formar parte de malones de abastecimiento en las fronteras de Córdoba y San Luis. Estos también integrarán, a inicios de la década de 1870, uno de los apoyos fuertes en los malones políticos encabezados por los salineros en respuesta a diversos conflictos suscitados en las fronteras. Será en estas circunstancias cuando queden en evidencia los signos de fragmentación de las alianzas con otros sectores: con los caciques vinculados a Patagones –especialmente con Sayhueque– y con los principales indios amigos instalados en las fronteras de Buenos Aires.

Una vez finalizada la guerra del Paraguay, las relaciones entre el estado y los distintos sectores del campo indígena comenzaron a divergir notoriamente: hacia la confrontación en algunos casos y hacia la consolidación de las relaciones basadas en acuerdos de paz, en otros. Ello será más significativo en la medida en que en esta década el estado intenta concretar los objetivos de expansión territorial dispuestos por la Ley 215 de 1867. Desde algunas jurisdicciones se continuaron extendiendo con éxito las redes diplomáticas hacia nuevos sectores indígenas. Las autoridades de San Rafael, en Mendoza, logran avanzar en la incorporación de algunos grupos pehuenches de la zona cordillerana, comenzando por el tratado firmado en 1870 con el cacique Caepe, quien junto con el caudillo Pedro Pérez habían sido “el alma de las invasiones de esa frontera”³⁹ en los últimos años. Un nuevo tratado se realiza en 1872 desde esa jurisdicción con numerosos caciques del sur mendocino y norte neuquino. Otros caciques pehuenches afianzan relaciones de comercio y de abastecimiento en raciones por Carmen de Patagones, manteniendo un vínculo estable con esta jurisdicción a lo largo de la década de 1870. En 1872 son firmados en Patagones tratados con Queupumil y su hermano Yancamil,⁴⁰ los que continuarán bajo el sistema de raciones hasta fines de la década de 1870. También en 1872, y bajo la mediación de Miguel Linares, es renovado por Patagones el tratado mantenido con Sayhueque, al que se suma la firma de un primer tratado con el cacique Juan Ñancucheo.⁴¹

39 Carta del comandante de la frontera Sud de Mendoza, Ignacio Segovia, al Ministro de Guerra, SHE, caja 31, 1083.

40 SHE, Caja 34, 1180, en Levaggi (2000: 450).

41 SHE, Caja 34, 1185, en Levaggi (2000: 452).

Mientras se consolidan los vínculos pacíficos con caciques cordilleranos y del sur del río Negro, las relaciones con salineros y ranqueles bascularán entre procesos de negociación y ataques a las fronteras. Aunque con demoras en la entrega de las raciones, el tratado firmado por el cacique Baigorrita con el gobierno nacional en 1872 inicia un período de paz entre los ranqueles y las jurisdicciones del sur de Córdoba hasta 1878 (Tamagnini/Pérez Zavala 2002). Sin embargo, este período pacífico sería acompañado de importantes conquistas por parte del estado en la ocupación de la frontera de Córdoba. De hecho, desde 1865 los sucesivos tratados de paz con los ranqueles (1865, 1870, 1872 y 1878) favorecieron no sólo el aislamiento progresivo de los principales caciques ranqueles de fuerzas provinciales opuestas al gobierno central y grupos salineros, sino su fragmentación interna, expresada en la acción independiente de sus dos principales caciques. En el caso de los ranqueles, el carácter de desigualdad que adquieren progresivamente los tratados con los blancos se expresa en la consolidación de avances territoriales paulatinos de la frontera, en el incremento de las rivalidades entre caciques principales y capitanejos, y en el posterior debilitamiento que significó para el poder de los principales caciques el tránsito de algunos capitanejos a reducciones de frontera.⁴²

Es posible que esto se haya dado por el desplazamiento del conflicto fronterizo nuevamente hacia la frontera sur y costa sur, a partir de nuevas acciones tomadas por los comandantes de frontera al finalizar la Guerra del Paraguay. Aunque con un importante incumplimiento de las raciones por parte del gobierno,⁴³ del frecuente maltrato sufrido por las comisiones indígenas, los avances parciales de la frontera de 1869 y los intentos de ocupación del paso de Choele Choel, las relaciones entre Salinas Grandes y Azul se habían mantenido, facilitando los intercambios comerciales, el flujo de personas y una correspondencia fluida en la que Calfucurá presionaba por frenar los avances territoriales y exigía el cumplimiento del tratado, anunciando incluso la invasión de grupos indígenas que atravesaban la Cordillera para invadir las fronteras.

En aquellos momentos las tribus arribanas estaban pasando el momento más álgido de su resistencia contra el ejército chileno. La presencia, por segunda vez, del aventurero Orllie Antuan I –autoproclamado Rey de la Araucanía– entre los arribanos del cacique Quilapán habría de impulsar la entrada del ejército chileno en el corazón del territorio indígena y a reforzar los parlamentos de paz con las demás reducciones, para impedir que se sumaran a un alzamiento general. La derrota de

42 SHE, Caja 34, 1185, en Levaggi (2000: 452).

43 En el caso de Calfucurá, en sus cartas a las autoridades nacionales, denuncia que desde 1868 sus raciones se han reducido a una entrega anual. Carta de Calfucurá al Ministro Martín de Gainza, 22/7/1872, Archivo General de la Nación (en adelante, AGN, VII, Legajo 42, f. 6186). La Sociedad Rural Argentina envía una carta al Gobierno de la Provincia denunciando que para mediados del año 1870 a Calfucurá se le debían cinco trimestres de raciones que el gobierno se había comprometido a entregar por tratados (Weimberg 1975, en Barros 1975).

los arribanos en su propio territorio impulsó una importante migración de indígenas a las pampas.⁴⁴ La presencia de estos nuevos contingentes constituyó un elemento de presión para las confrontaciones que renacieron entre salineros y fuerzas estatales. De hecho, ya en febrero de 1870, Calfucurá alertaba sobre una próxima invasión a Tres Arroyos por parte de indios “chilenos” que habían cruzado la Cordillera “para ocupar Choele Choel” (Hux 1991: 87). Probablemente la presencia araucana en Salinas Grandes y en las tolderías ranqueles se vincula a malones menores sobre las estancias del sur de Córdoba, Santa Fe y noreste de Buenos Aires, atribuidos a lanceros o tribus amigas de Calfucurá. Sin embargo, creemos que los elementos precipitantes de esta nueva etapa de conflictos fueron las prácticas de represión sobre los indios amigos asentados en las fronteras de Buenos Aires.

En marzo de 1870 el comandante de la frontera de Bahía Blanca, José O. Llano, avanza sobre los campos de Cañumil –cacique cercano a Calfucurá e instalado desde fines de 1865 en Bahía Blanca–, acusándolo de robo de ganado. Más de setenta lanceros son muertos, el cacique y la tribu apresados y el ganado saqueado. Calfucurá exige la liberación de Cañumil y el reemplazo del comandante Llano, denunciando que este comandante de frontera impedía la entrega regular de las raciones. Estas exigencias no son satisfechas sino hasta después que Tres Arroyos y Bahía Blanca son atacados en sendos malones de los salineros con una fuerza de 2.000 lanceros (Rojas Lagarde, en Hux 1991: 89).

Estas situaciones de confrontación muestran que la invasión en gran escala –como acción o como amenaza– seguía formando parte de la estrategia de Calfucurá. Pero en el campo posible de alianzas ya no se contaban todos los grupos que habían estado presentes en la Confederación Indígena de 1855. No sabemos si el jefe salinero contó, por ejemplo, con el apoyo de los principales caciques ranqueles –que en estos meses se hallaban gestionando un tratado con Río Cuarto a través del coronel Mansilla– pero sabemos que tehuelches y manzaneros se rehusaron a participar en este ataque. Creemos que como resultado del establecimiento exitoso de tratados de paz y de las consecuentes relaciones de comercio y abastecimiento derivadas de los mismos, las poblaciones indígenas del sur cordillerano y patagónico, vinculadas a Carmen de Patagones, se mostraron remisas a unirse a los salineros en la guerra contra los blancos.

Las crónicas del viajero inglés George Musters, quien en esos momentos acompañaba a grupos tehuelches y araucanos en su viaje hacia las tolderías de Sayhueque, cuentan que Calfucurá había buscado para esta invasión el apoyo del cacique tehuelche Casimiro, a quien le envió el siguiente mensaje transmitido en

44 León Solís (1981); Braun Menéndez (1945). Para enero de 1870 la cancillería chilena temía que grupos de indígenas del este cordillerano apoyaran un levantamiento de los araucanos, apoyando a Orllie, SHE, Caja 31, 18° 5652. También para la época se temía que 300 “gauchos argentinos” estuvieran por apoyar una invasión pehuenche en Chile (SHE, Caja 31, 18° 5656).

parlamento: “Tengo el caballo pronto, el pié en el estribo y la lanza en la mano y voy a hacer la guerra a los cristianos, que me tienen cansado con su falsía” (Musters 1997: 230). Según Musters, un conjunto heterogéneo de grupos que reunían comitivas de tehuelches, manzaneros y araucanos se reunió para tratar este pedido:

Tuvo lugar un parlamento que duró hasta la noche y fueron sancionadas las siguientes conclusiones: Que Casimiro sería reconocido como comandante general del sur, extendiéndose su jurisdicción sobre todos los indios del sur del Limay; que con su ejército garantizaría la salvación de Patagones y pondría en jaque a los indios pampas de Salinas, mandados por Calfucurá, en el improbable caso de que quisiera atravesar el río Negro con el propósito de asaltar los establecimientos. Que todos unidos marcharíamos a las Manzanas a *proponer a Shayhueque que garantice con su ejército la seguridad de la costa norte del río Negro, rechazando, si fuera necesario, a Calfucurá y defendiendo a Patagones* (Musters 1997: 233, énfasis nuestro).

Un segundo parlamento tuvo lugar, efectivamente, más al norte, en los toldos de Sayhueque, al que habría asistido Mariano Linares, hermano del principal representante de los indios amigos de Patagones. Allí se reafirma la decisión de rechazar la invasión, “pues de otro modo perderían inevitablemente las provisiones de caballos y de ganado que les daba el Gobierno de Buenos Aires; y que era más provechoso recibir anualmente las raciones que asaltar y destruir los establecimientos del río Negro” (Musters 1997: 265, énfasis nuestro). El parlamento resolvió transmitir a Calfucurá que marcharían en defensa de Patagones y contra los salineros si estos extendían sus ataques más al sur de Bahía Blanca.

Tampoco las indiadas de Cipriano Catriel –quien para entonces había sucedido a su padre Juan Catriel– se sumaron a estas invasiones. Se abrió así una brecha con algunos indios amigos, como Coliqueo, Catriel, Linares y Ancalao, quienes en este contexto no apoyan a Calfucurá.⁴⁵ En el Azul, la tradicional flexibilidad con las que los catrieleros afrontaban las condiciones de vida en la frontera, en particular el apoyo militar contra los indígenas de tierra adentro, se había estrechado rápidamente. Un manejo discrecional de compensaciones a distintos caciques y tribus amigas por parte de los jefes de frontera había logrado obtener el apoyo de Catriel para reprimir a otros caciques amigos, situados en la vecina localidad de Tapalqué. Se intentaba así fortalecer las funciones militares y el poder coercitivo del cacique, los que contradecían las pautas de autoridad por consenso y de decisión colectiva que regían entre los indígenas. Es posible que la participación de Catriel en este acuerdo pueda ser leída como un incremento de sus capacidades de articulador interétnico y de éxito en su ascenso personal en la administración fronteriza, pero el curso

45 Ello los convertiría en el objeto de venganza de los grupos salineros. Poco tiempo después, **indios** de Calfucurá y Pincén atacaban a los grupos amigos de Bahía Blanca y del oeste que se mantenían fieles al gobierno, como los indios amigos de Linares y Ancalao del Arroyo Parejas, al sur de Bahía Blanca (Hux 1991: 90).

de los acontecimientos demostraría que ello implicaba una pérdida global del poder de los indios amigos en la frontera en pos de una mayor subordinación al estado.

Luego de los golpes a Tres Arroyos y Bahía Blanca, Calfucurá intentará reestablecer el diálogo diplomático para “estar de amigo con mi Gobierno que me sirve en muchas cosas para sostener mi indiada”.⁴⁶ El nuevo comandante de Bahía Blanca, Julián Murga, responderá a estas propuestas apuntando a cambiar prisioneros hechos en las últimas invasiones, prometiendo la próxima firma de un nuevo tratado de paz. Sin embargo, los partes militares revelan que el objetivo era ganar tiempo hasta reunir recursos e información para avanzar sobre sus tolдерías.⁴⁷ Paralelamente, el senado nacional había votado ya a favor la adjudicación de dos millones de pesos para el cumplimiento de la Ley 215 de avance de las fronteras (Hux 1991: 88).

Un nuevo conflicto en la frontera sur conocido como el ataque de “Laguna de Burgos” desembocaría en la próxima y última confrontación con el cacique Calfucurá. Este fue un malón realizado en mayo de 1871 por Catriel y parte de sus indios sobre los campos y familias de los caciques “rebeldes” Manuel Grande, Chipitruz, Ramón López y Cachul, matando y encarcelando a sus lanceros y despojándolos de sus animales.⁴⁸ Este conflicto, como vimos, había sido favorecido por el comandante de frontera y fue apoyado por el ejército nacional. Los malones que a lo largo de este año sufrieron las fronteras de Mendoza, San Luis, Santa Fe y hasta los fortines cercanos a Bahía Blanca y Carmen de Patagones⁴⁹ fueron la respuesta de los salineros a los tratos recibidos por los indios amigos, considerados como una nueva interrupción de los vínculos pacíficos (Raone 1969: 50).

A fines de 1871, los partes militares difundían el rumor acerca de que Calfucurá estaba reuniendo 2.000 hombres, entre ellos a grupos provenientes de Chile, para atacar las fronteras. Al mismo tiempo desde el ministerio de Guerra se impartía la orden de ocupar nuevamente el punto de Choele Choel. Seguramente ambos acontecimientos motivaron, en marzo de 1872, el ataque de 3.500 lanceros en confederación, compuestos por caciques salineros, contingentes cordilleranos de Reuquecurá, indios “chilenos”, ranqueles y hasta las tribus amigas de Raninqueo y Tripailao, sobre las localidades de Alvear, 25 de mayo y 9 de Julio, en el que saquearon 200.000 cabezas de ganado y cautivaron a 500 personas (Hux 1991: 91).

46 Calfucurá al Coronel Boerr, Salinas Grandes, 21/12/1870 (SHE, Caja 31, 6256).

47 Julián Murga al inspector y comandante general de armas, Emilio Mitre. Bahía Blanca, 12/11/1870 (SHE, Caja 32, 1130). El acuerdo estaría en el Archivo del Estado Mayor del Ejército (AEM), 9.3.71 (Hux 1991: 91).

48 AGN, *Memoria del Ministerio de Guerra* (1871: 246-248).

49 Ocho invasiones se producen a fines de 1871 en las cercanías de Bahía Blanca (AGN, *Memoria del Ministerio de Guerra*, Anexo C: 9).

Este fue el último y más terrible ataque comandado por Calfucurá, que probó el alcance de su convocatoria en el espacio araucano y pampeano.⁵⁰

También las líneas de fragmentación de sus alianzas se expresarían en esta coyuntura. Las fuerzas del ejército nacional salieron al encuentro de las fuerzas indígenas, enfrentándolas en la batalla de San Carlos. Las fuerzas del ejército nacional, notablemente inferiores en número, lograron imponerse gracias al apoyo decisivo de las tropas de indios amigos que mantuvieron su apoyo al ejército nacional, aún cuando a partir del giro ofensivo de la administración fronteriza, habían comenzado a sentir no sólo la falta de raciones y el aumento de cargas militares, sino que eran objeto de represiones bajo la sospecha de “rebelión”. En la batalla, junto a las tropas nacionales, participaron activamente 250 indios de Coliqueo y 800 indios de Catriel, además de lanceros de Chipitruz y Manuel Grande.⁵¹

Esta confrontación militar evidencia la fragmentación del campo indígena en relación a un estado que no sólo dejaba en claro su intención de avanzar las fronteras, sino que al menos en el caso de los indios amigos, exigía una mayor subordinación militar. De esta manera, los grupos amigos que habían cumplido hasta el momento un papel meramente disuasor o que, como los de Catriel, habían llegado incluso a participar en las movilizaciones de Calfucurá, se encontraban ahora ante un estrechamiento progresivo de su espacio político, enfrentándose a la disyuntiva de aceptar la subordinación efectiva del ejército nacional o alinearse bajo el bando de los indígenas de “tierra adentro”. Este proceso terminó atravesando a las poblaciones amigas, que adoptaron posturas disímiles. Mientras que algunos caciques se mantuvieron bajo la subordinación de los jefes de frontera, estimulando a sus lanceros para que acompañaran a las tropas del ejército en las confrontaciones con las fuerzas de Calfucurá y sus aliados, otros abandonaron sus tierras en la frontera y se sumaron a los salineros. En varios casos esto implicaría la fisión de las tribus amigas y el enfrentamiento fratricida entre los caciques de mayor importancia, como en el caso de los caciques hermanos Coliqueo y los Catriel (Hux 1980; Jong 2008).

Mientras este espacio va tornándose crítico en la frontera bonaerense, la práctica de tratados, como vimos anteriormente, va consolidándose con los grupos cordilleranos –pehuenches y huilliches o “manzaneros”– así como con aquellos caciques de Patagonia que mantienen tratos comerciales y reciben raciones por Carmen de Patagones. El objetivo de la misma era impedir la unión con los salineros, buscan-

50 Según el parte del Coronel Boer acerca de la batalla, acompañaban a Calfucurá su hermano Reuquecurá con 1.000 indios cordilleranos y “chilenos”, “patagones” y Epugner –sucesor de Mariano Rosas– con 500 ranqueles. No sabemos quiénes eran los llamados “patagones” mas creemos que no eran los indios de Sayhueque, quien se hallaba por entonces en tratativas para renovar los tratados con Carmen de Patagones (AEM, 6482 y 6481, en Hux 1980: 141).

51 En algunos casos esto no ocurrió sin resistencias: ante la renuencia de sus lanceros, Catriel solicitó al comandante Rivas que un piquete del ejército se ubicara tras sus fuerzas para matar a quienes no participaran de la batalla (AGN X 43-7-3, en Hux 1991: 95).

do incluso intervenir –en base a regalos y raciones– en las alianzas que Reuquecurá mantenía con su hermano Calfucurá.⁵²

Mientras tanto, los jefes salineros intentaban ampliar el marco de sus alianzas convocando a todos los jefes indígenas a participar en un gran parlamento general, desde el cual se plantearía, en nombre de los grupos participantes, un nuevo proceso de negociación. Calfucurá había pedido a su hermano Reuquecurá que pactara con los caciques arribanos Quilapán y Quilahueque convocándolos a la guerra y al malón y, a mediados de 1873, cuando muere Calfucurá, se hallaban reunidos más de 160 caciques, caciquillos y capitanejos en Salinas Grandes (Hux 1991). El “triumvirato” elegido para suceder al líder salinero, conformado por sus hijos Manuel Namuncurá, Alvarito Reumay y su sobrino y secretario letrado Bernardo Namuncurá,⁵³ intenta proseguir con el objetivo de construir un campo de alianzas lo más amplio posible. A su vez, Namuncurá insiste en estos años en la gestión de un nuevo tratado de paz que exigía la suspensión del proyecto de ocupación de Carhué y de Choele Choel, además de grandes montos en raciones para sus caciques aliados. Las respuestas del gobierno continuarían siendo ambigüas y evasivas, prometiendo la próxima realización de tratados pero sin concretarlos. Sin embargo, el objetivo de llevar las fuerzas del ejército nacional sobre Salinas Grandes debió ser postergado ante el surgimiento de nuevos frentes de oposición interna.⁵⁴

Desde el último tercio de 1874, con el inicio del gobierno de Nicolás Avellaneda y la gestión de Adolfo Alsina como ministro de Guerra, se inicia un plan de avance de fronteras por etapas, dando prioridad al equipamiento de los soldados y la consolidación de las líneas fronterizas de avanzada mediante la construcción de potreros y alfalfares que aseguraran la disposición de caballadas. El ministro proponía el avance sobre los puntos fronterizos de Italoo, Trenque Lauquen, Guaminí y Puán, disminuyendo en 186 km la línea anterior de fronteras hasta Bahía Blanca e integrando 56.000 kilómetros cuadrados a la producción agrícola. Esta nueva

52 En 1872 se envía al mayor Bejarano que conducía a las tribus de Sayhueque y Reuquecurá, a quienes llevaba sus raciones anuales de 1.000 vacas a cada una, con la misión de censar los lanceros de estos caciques y persuadir a estos jefes caciques de que cumplieran con los tratados pactados y no volvieran a prestar auxilio a Calfucurá. Constituía también una expedición solapada de reconocimiento del camino para una expedición futura por tierra (Raone 1969).

53 La participación de este último, que se había criado en Chillán y mantenía vínculos de parentesco y políticos intensos con los caciques huilliches del sur araucano, da cuenta de la importancia que se otorgaba a las alianzas con las fuerzas indígenas trasandinas.

54 El ejército debe sofocar un nuevo levantamiento civil en Corrientes en 1872, y otro de López Jordán en Entre Ríos al año siguiente. En 1874 será la revolución mitrista la que tenga un impacto directo sobre esta configuración. Éste fue un levantamiento de los seguidores de Bartolomé Mitre, perdedor ante Nicolás Avellaneda en las últimas elecciones. Protagonizado por los jefes militares que se habían mantenido adictos al liberal porteño, este movimiento se desarrolló en los espacios de la frontera sur, involucrando a las poblaciones de indios amigos, especialmente los de Catriel en el Azul. En el contexto de la derrota del bando mitrista, Cipriano Catriel es muerto a mano de sus seguidores, encabezados por sus hermanos Juan José y Marcelino Catriel.

línea de avanzada estaría protegida por una zanja defensiva que impediría el paso de los arreos en caso de que los indígenas penetraran a invadir.

Respecto de los indios amigos, este plan implicaba integrar a los indios catrieleros como miembros de la Guardia Nacional y enviarlos a realizar tareas de vigilancia en la nueva frontera. Un nuevo tratado ofrecido a Juan José y Marcelino Catriel a fines de 1875 complementaba estas medidas, proponiendo el abandono de sus asentamientos en Azul y el traslado de la tribu hasta la avanzada de fortines, además de su incorporación formal a las fuerzas militares y el uso de uniforme. Aunque este tratado fue firmado, el levantamiento de los catrieleros a los pocos días demuestra el rechazo a estas medidas. El 26 de diciembre de 1875 los lanceros de Catriel, abandonando para siempre sus tierras en Azul, se unen a las fuerzas de Namuncurá, Pincén, Baigorrita y otros grupos provenientes de Neuquén y Chile. Esta invasión fue devastadora, con gran cantidad de muertes y cautivos y el robo de cerca de 300.000 cabezas de ganado (Hux 1991).

El lenguaje diplomático parecía estar perdiendo su lugar en las relaciones interétnicas. El mismo general Julio A. Roca, sucesor de Alsina como ministro de Guerra en 1878, sostenía que los Pampas “ya estarán alerta por causa de sus mensajes [del presidente Avellaneda] al Congreso y el estudio intentado en Carhué, y no han de creer ni esperar en la paz de que últimamente se trata” (Julio A. Roca 1978, en Raone 1969: 79). Efectivamente, Namuncurá, enterado de los planes de Alsina, escribe a las autoridades nacionales:

Nos parece mal esta disposición que hace por parte del Superior Gobierno, llamando la atención de este incidente reconocemos que como todavía no nos hemos dado la mano derecha para quedar definidos los arreglos de paces se ordena una disposición que grava a nuestro estado de los indios en quitarnos el campo de Carhué ni haberse vendido dicho campo se halla de esta parte de la línea de fortines ocupado de hacienda, en que se grava el mal de nuestro trabajos. [...] Comunicándole que he soñado que los cristianos me quitaban un campo, si en caso estos campos que defiende me los sacan entonces me someteré entre los cristianos y haré grandes daños y sabremos quién podrá más.⁵⁵

Se había mantenido una dinámica en la que los indígenas habían logrado, con su capacidad de confrontación, obligar al gobierno nacional a seguir proponiendo condiciones aceptables de negociación. Pero la capacidad de Namuncurá y sus aliados para condicionar al gobierno a través de la relación de fuerza estaba debilitándose. La asimetría entre el poder bélico indígena y el blanco se había acentuado rápidamente, por un conjunto de razones: entre ellas, las mejoras tecnológicas vinculadas a la extensión del telégrafo hacia los puestos fronterizos y la incorporación del fusil Remington, que permitían una mejor comunicación y defensa a las

55 Documento 1243, Archivado en la División Historia del Estado Mayor del Ejército, en Raone (1969: 79).

tropas. Pero también incidía en la economía indígena el efecto de la disminución de las raciones provistas por el gobierno y la ocupación de sus territorios de asentamiento, con la consiguiente falta de acceso a las ricas pasturas y aguadas necesarias para sostener a las caballadas.⁵⁶ Es por ello que el avance de las tropas a las tierras de Carhué, y la construcción de la “zanja de Alsina” en 1876 constituiría un grave golpe para la estrategia de resistencia indígena.

A su vez, la ausencia de aliados clave en esta guerra declarada no sería un factor menor en el acelerado desbalance de esta relación de fuerzas. De aquí en más, las alianzas entre salineros, catrieleros y cordilleranos de Reuquecurá serían las más estables, y a ellos se le sumarían intermitentemente grupos identificados en las fuentes como ranqueles y seguidores de Pincén. Mariano Rosas, que se hallaba bajo tratados de paz, no actuó en este período junto a los salineros.⁵⁷ Los indígenas confederados continuaron ejerciendo un asedio constante sobre los fuertes recién construidos al oeste bonaerense, llevando a cabo tres malones de consideración y numerosos ataques puntuales a lo largo de los años 1876 y 1877. Las invasiones de Namuncurá, Reuquecurá y Catriel, a los que se suma Pincén, se producen en diversos puntos de la frontera sur y costa sur a lo largo de estos años, sumando a fracciones de los indios amigos de Coliqueo, Manuel Grande y Tripailao. La mayor parte de estas incursiones fueron enfrentadas con éxito por el ejército nacional, que obligaba a los salineros a abandonar gran parte de sus arreos (Raone 1969: 117).

Para inicios de 1877, cuando los últimos levantamientos provinciales son dominados por el ejército nacional,⁵⁸ Alsina permite la entrada tierra adentro de expediciones ligeras con el objetivo de atacar los toldos de Catriel, Pincén y los salineros de Namuncurá, los principales focos de resistencia. Estas excursiones punitivas sorprendieron a los indígenas en una situación de debilidad, dada las dificultades de subsistencia por el desalojo de sus asentamientos tradicionales. Esta política ofensiva sería profundizada luego por Julio A. Roca. El nuevo ministro, que desde hacía unos años venía publicando sus opiniones sobre la cuestión fronterizas en los medios de prensa, planificaba una operación de “limpieza del desierto” en dos fases: desterrar primero a los ranqueles con incursiones en sus guaridas, que los obligaran a someterse o a retirarse a las faldas de la Cordillera, más allá del río

56 La nueva línea de fortines quitaba además a los grupos que ofrecían resistencia las aguadas y pasto que servían de descanso a sus cabalgaduras en una invasión, distanciando en varias leguas el trayecto que debía ser recorrido para arrear ganado desde los establecimientos de frontera. Informe del Ingeniero José F. Cetz al Ministro de Guerra Martín de Gainza, 5/1/1870 (SHE, Caja 31, 18^a 5620).

57 Este cacique es quien informa al general Julio A. Roca de la llegada del cacique Reuquecurá y dos mil de los suyos en apoyo a los indígenas de Namuncurá y Catriel (Raone 1969: 128).

58 Mientras en julio de 1876 volvería a levantarse López Jordán en Gualaguaychú, al mando de 4.000 hombres, en un movimiento que recién sería dominado por el ejército en diciembre del mismo año (Raone 1969).

Neuquén o al otro lado del río Negro, permitiendo entonces frenar nuevas incursiones de araucanos que quisieran poblar el norte de la Pampa, y al mismo tiempo impedir las comunicaciones de los indios de Salinas Grandes con Chile. En una segunda etapa, se emprendería la misma clase de guerra con los salineros. Consideraba esencial disponer de un año para preparar las bases fronterizas con caballadas y forrajes suficientes para el segundo año, en que se harían las incursiones punitivas. Hasta entonces sería necesario guardar el más absoluto secreto acerca de estos planes, “guardando mientras tanto la paz con los indios” (Julio A. Roca 1877, en Raone 1969: 126).

El tratado renovado con los ranqueles en 1878 forma parte de este objetivo de mantenerlos quietos y separarlos de los grupos que resistían. Se firman tratados con el cacique ranquel Ramón y con los ranqueles Epugner Rosas y Baigorrita (Tamagnini/Pérez Zavala 2002; Pérez Zavala 2007). En estos últimos tratados no se especificaba nada acerca de los planes de próximos avances de frontera; se establecía

la paz y obediencia entre los pueblos cristianos de la República Argentina y las tribus ranquelinas, que por este convenio prometen fiel obediencia al Gobierno y fidelidad a la Nación de que hacen parte y el Gobierno por su parte les concede protección paternal (Levaggi 2000: 520-521).

Uno de los asesores principales sería el coronel Manuel José Olascoaga, un mendocino de amplia experiencia en las relaciones fronterizas en las pampas y en la Araucanía. Este militar y topógrafo influiría profundamente en el ministro de guerra, orientándolo a considerar la expulsión de los indígenas y la ocupación de las tierras hasta el río Negro como la única solución de las fronteras. Para Olascoaga, la amenaza indígena sobre las propiedades pampeanas se alimentaba de los intereses comerciales de los comerciantes chilenos. A su vez, los intereses territoriales de Chile sobre la Patagonia convertían la ocupación de las pampas en un problema de soberanía nacional de urgente solución (Jong 2002). Pero es Roca el que definitivamente encamina la solución del “problema fronteras” en términos militares, disponiendo treinta nuevas expediciones punitivas que continuaron las que ya se habían iniciado en los últimos meses del ministerio de Alsina. Al promediar el año 1878, antes aún de dar inicio a la marcha de cinco columnas expedicionarias que realizarían la “Conquista del desierto”, el ministro de guerra ofrecía un panorama de las fuerzas indígenas en las pampas y las cordilleras que mostraba las consecuencias de un proceso de sometimiento ya en marcha:

Los Ranqueles, famosos en la Pampa, por ser los más valientes, se hallan reducidos en la actualidad a menos de seiscientas lanzas, a consecuencia de haberse presentado grupos numerosos a los jefes de frontera de San Luis y Córdoba, prefiriendo vivir al abrigo y protección inmediata de la Nación y de sus tropas, antes que en el desierto [...] La tribu de Namuncurá, notablemente disminuida a consecuencia de contrastes y derrotas,

últimamente sufridas, con motivo de las expediciones realizadas y del avance de la línea de fronteras hasta Carhué [...] se encuentra ahora Namuncurá con cien guerreros, la flor de su tribu y de su familia, en Maracó Grande, veinte leguas próximamente al suroeste de Chilihué, hacia el Colorado. El resto se ha dispersado entre los montes, en precaución de nuevas persecuciones. El cacique Pincen, el más atrevido y aventurero de los salvajes [...] ha sufrido rudos golpes que lo han desmoralizado completamente. Su residencia es la laguna Maltlicó, 10 leguas al oeste de Trenque Lauquén, y el número de sus indios alcanzará apenas a cien [...] Como se ve, la Pampa está muy lejos de hallarse cubierta de tribus salvajes, y éstas ocupan lugares determinados y precisos (Julio A. Roca 1878, en Raone 1969: 140).

Capítulo 6: Los tratados de paz y el mapa político indígena

1. La política de tratados de paz: características

Hemos resumido hasta aquí los acontecimientos centrales de las relaciones entre el gobierno nacional y distintos sectores indígenas de Pampa y Patagonia apuntando a reconstruir un panorama general de la política estatal hacia la sociedad indígena. Distinguimos a los tratados de paz como el principal dispositivo diplomático empleado en estas décadas en las relaciones entre indígenas y blancos. En muchos casos fueron los propios caciques los que tomaron la iniciativa de solicitar tratados, enviando comisiones a las jurisdicciones de frontera. Otras veces fue el gobierno que inició el proceso, con propuestas llevadas a los toldos por enviados especiales o a través de otros caciques ya integrados a las relaciones pacíficas. La “negociación de la paz” constituyó una estrategia de ambos sectores. Pero si bien los tratados fueron una herramienta diplomática común y consensuada, colaboraron a fortalecer una creciente asimetría de poder entre ambos sectores. En otras palabras, los agentes estatales lograron emplear este recurso diplomático con más eficacia que los indígenas para el logro de sus objetivos en las fronteras. Intentaremos en lo que sigue sintetizar las características generales de la política de tratados de paz en tanto instrumento del estado, para luego analizar las lógicas con las que estos sectores se involucraban en las relaciones diplomáticas.

Si bien la práctica de tratados de paz había sido fundamental durante el período de gobierno rosista, adquiere desde la década de 1860 en adelante un papel central en la política del estado unificado, dirigida a lograr la ocupación del territorio indígena y el sometimiento de sus habitantes. Este objetivo se configura con más fuerza desde las elites políticas porteñas en función de una más clara posibilidad de inserción de la producción pampeana en el comercio internacional, y la consiguiente presión por el uso de la tierra. Pero es el propio proceso de unificación política e institucional del estado y la progresiva disminución de los conflictos faccionales a su interior los que colaboran para que las medidas de avance fronterizo y someti-

miento de los indígenas se presenten como el horizonte común a una comunidad que comienza a verse a sí misma como políticamente homogénea.

No obstante, todo este período mostrará a nivel de las fronteras signos de que esta unidad política a nivel nacional y este consenso hacia el dominio del estado en manos de la burguesía comercial porteña están lejos de consolidarse. Lo prueban las rebeliones político-sociales de las montoneras que se suceden en la década de 1860 y que se perpetúan en los levantamientos del litoral hasta mediados de la década siguiente. Pero estos conflictos no vuelven a presentar a los indígenas el espacio estratégico que significó la posibilidad de intervenir en los enfrentamientos entre Buenos Aires y la Confederación durante la década de 1850. Desde inicios de la presidencia de Bartolomé Mitre, esta política de tratados será ejercida por un solo centro estatal, limitando el juego de alianzas interétnicas que los caciques indígenas habían logrado capitalizar durante la década previa.

En este sentido, algunas de las primeras características de la política de tratados del estado nacional fue la de su *centralidad*: aunque gestionados desde cada jurisdicción fronteriza desde Mendoza hasta Carmen de Patagones, las decisiones eran tomadas por el Ministerio de Guerra y ratificadas por el presidente. La gran distancia entre la letra de los tratados y la forma en que éstos fueron o no cumplidos por las autoridades de las diversas jurisdicciones de frontera requiere que tengamos en cuenta la diversidad de situaciones e intereses que mediaron la aplicación de esta política. De esta manera, difícilmente esta política adquiriera igual coherencia y unidad que la desarrollada por Rosas durante su gobierno. Sin embargo, es posible que durante la organización nacional esta política se haya caracterizado por una mayor *sistematicidad*, en tanto los tratados se ofrecen a lo largo de este período a un amplio número de caciques hasta extenderse sobre las principales agrupaciones indígenas de Pampa y Patagonia.

En el despliegue de esta práctica diplomática fue central la figura del cacique, no sólo como interlocutor en representación de su grupo sino como trasmisor de la voluntad estatal hacia otros sectores aún no involucrados con el gobierno. Fue común que muchos de los caciques que firmaban un tratado fueran encomendados como embajadores en la tarea de contactar y atraer a nuevos caciques a las negociaciones, por lo que consideramos que la *reticularidad*, es decir, la operación a través de las redes de alianzas indígenas fue otra característica de esta política. El proceso de expansión de tratados no se limitaba a transitar estas redes sino a influir en las mismas. Contribuía por ejemplo a fortalecer la autoridad, jerarquía y ascendencia de estos “caciques embajadores” por sobre aquellos que se sumaban al sistema de tratados, colaborando a delinear espacios territorial y políticamente diferenciados, representados ante el estado por este cacique principal. Este fue el caso de Yanquetruz al ser nombrado “comandante en jefe del territorio de la Pampa adyacente a Patagones”; el de Catriel al ser nombrado “general y cacique superior de las tribus del sur”; el de Miguel Linares, reconocido en su ascendencia por los

caciques que negociaban con Patagones; el de los caciques Caepe y Purrán como representantes de los pehuenches ubicados en la banda norte y la banda sur del río Neuquén, o el de Sayhueque al devenir en cacique principal del “País de las Manzanas”, consolidación de un territorio y una identidad que acompañaron la ascendencia de este líder como representante político ante el estado nacional (Vezub 2009).

En contraste, las negociaciones mantenidas con los salineros no apuntaron a fortalecer el prestigio y la representatividad de su cacique principal Calfucurá. Por el contrario, se orientaron a favorecer la separación de sus principales caciques aliados en la Confederación Indígena y luego de los componentes de su entorno político inmediato, a quienes se ofrecieron tratados bajo la condición de trasladarse a la línea de frontera en calidad de “indios amigos”. Por ello, aunque siguieron un patrón común, los tratados no tuvieron efectos idénticos, ya que en el caso de los salineros tendieron a disminuir la ascendencia de su cacique principal sobre otras parcialidades. Evidentemente el estado nacional pensaba en el campo indígena en su conjunto y utilizaba los tratados como instrumentos diplomáticos para intervenir y ordenar un campo de alianzas indígenas que había probado ser capaz de unificarse bajo el liderazgo de Calfucurá.

En este sentido, destacamos la *selectividad* de esta política, en tanto buscó conscientemente intervenir en el prestigio y las alianzas creadas en el campo indígena limitando la ascendencia de aquellos sectores que oponían mayor resistencia a los avances territoriales. Esta selectividad se expresaba también en las concesiones específicas que los tratados exigieron de los distintos sectores indígenas, tales como el compromiso de no aliarse a Calfucurá —exigencia incluida en distintos tratados realizados con ranqueles, araucanos, huilliches y tehuelches—, así como la cesión de tierras y el apoyo para exploraciones territoriales de los territorios patagónicos, que aparece en la mayor parte de los tratados realizados con los caciques que habitaban las costas del río Negro y el sur patagónico.

Finalmente, puede resaltarse la *continuidad* de esta política a lo largo de todo el período, en tanto instrumento al servicio de una *lógica de ofensiva territorial*. En primer lugar, debe repararse en que esta política se desarrolló alternativa y paralelamente a la concreción de avances parciales de la línea de frontera nunca consensuados previamente con ranqueles y salineros, habitantes de esos territorios. A lo largo del período, la dinámica dada por la ruptura de los tratados y el retorno a las negociaciones implicó la aceptación, por parte de estos grupos, de los avances consumados por el estado sobre sus territorios. En segundo lugar, los términos pacíficos planteados a nivel diplomático fueron continuamente socavados por la definición, a nivel legislativo, de proyectos de ley destinados a la ocupación de los territorios indígenas. La práctica de tratados termina por ser abandonada una vez conquistados estos espacios por el ejército argentino, así como pierde su reconocimiento una de las figuras más fortalecidas y favorecidas por estos acuerdos: el

cacique. Con posterioridad a la conquista militar de la Pampa y la Patagonia esta figura será asociada a la subsistencia de costumbres y tradiciones primitivas contrarias a la integración a la nación.

2. Los tratados como “dispositivos de poder”

Al caracterizar a la política de tratados de paz durante el período de “organización nacional” como un “dispositivo de poder” (Foucault 1979; Boccara 1999) que habría canalizado la dominación estatal mediante mecanismos sutiles y orientados, complementarios a la coerción militar, lejos estamos de suponer una imposición unilateral de esta política de negociaciones pacíficas sobre las poblaciones indígenas. Está claro que debe considerarse en este espacio de negociación la propia agencia política indígena. En efecto, no hay duda de que bajo sus propios objetivos, los indígenas negociaron tratados y raciones, se beneficiaron de estos acuerdos y condicionaron la acción del gobierno nacional. De hecho, como resultado de esta heterogénea política, la población indígena de Pampa y Patagonia logró en estas décadas no sólo seguir ocupando sus tierras y frenar intentos de ocupación nacional que se hubieran concretado antes de no haber existido esta resistencia, sino también mantener beneficiosos circuitos comerciales y forzar al estado a comprometerse a abastecer periódicamente a estos grupos con raciones y sueldos, entendida por los indígenas como una “compensación” por el “arrendamiento” de sus tierras ocupadas por los blancos (Hux 1991: 56).

La adopción de las prácticas de negociación ajenas, como la fórmula jurídica del tratado de paz y su expresión escrita en idioma español, han sido interpretados en términos del surgimiento de “lógicas mestizas” (Ares Queija/Gruzinski 1997; Boccara 2003; 2005), o de “aculturación antagónica” (Zapater 1985; Bechis 2008). Dichos conceptos aluden a la conducta de estas poblaciones al adaptar elementos externos a su cultura manteniendo la capacidad de negociar y obtener sus propios fines. Esta capacidad de “resistir en la adaptación”,⁵⁹ no fue exclusiva de la sociedad indígena, sino también de los gobiernos nacionales, que mantuvieron durante gran parte del siglo XIX una relación de paridad de fuerzas con los indígenas. En este sentido, ya desde los inicios del negocio pacífico de indios las prácticas diplomáticas entre el gobierno de Rosas y distintas parcialidades indígenas se habían basado en el empleo de las modalidades indígenas de negociación, tales como la oralidad de los acuerdos y los prolongados parlamentos mediante los que se formulaban los pedidos y se asentaban los compromisos. Rosas fue muy cuidadoso en respetar las condiciones materiales y simbólicas de autoridad de los caciques, respetando la investidura y jerarquía de los mismos en su propio campo político, en-

59 Boccara propone esta expresión, refiriéndose también a la operación de “lógicas caníbales”, o “mestizas”, que condujeron a sociedades como la mapuche a “abrirse hacia el Otro”, incorporar la diferencia en un movimiento de “adherencia a la historia” (Boccara 2003; 2005; 2007).

tregando regalos que aquellos pudieran redistribuir entre sus subordinados y adaptando su discurso a los significantes culturales apreciados por sus interlocutores diplomáticos.

Así, también la celebración de tratados de paz entre caciques indígenas y agentes del estado nacional durante el período de organización nacional respondió a procesos de negociación en los que ambas partes buscaron, desde su perspectiva, el resultado más ventajoso, y en el que las instancias de negociación comprendieron fórmulas rituales y condiciones de ambos sectores.⁶⁰ En este sentido, puede verse la práctica de tratados tanto como una imposición de una práctica jurídica ajena al orden indígena (formulación de cláusulas, escritura en papel, debate y sanción del acuerdo por el congreso de la nación), como de adaptación de los agentes del gobierno nacional a las pautas indígenas que daban legitimidad al proceso de negociación, consulta y compromiso acerca de lo acordado (negociación con los caciques principales, tiempos de espera para la consulta a los caciques seguidores, largos parlamentos en los puntos acordados bajo la modalidad indígena, utilización de la lengua indígena, que obligaba al uso del lenguaraz, etc.).

Este espacio de intercambio diplomático, visto así como un *middle ground*⁶¹ en el que cada parte adopta los términos de acción del otro manteniendo sin embargo sus propósitos, definió un espacio de procedimientos y condiciones para el entendimiento durante el período analizado. En continuidad con las modalidades diplomáticas utilizadas en la primera mitad de siglo, en términos de la adaptación de los agentes estatales hacia los requisitos y tiempos involucrados en el proceso de acordar un tratado, el proceso de negociación de un acuerdo implicaba varias etapas de consulta: desde las comandancias de frontera al ministerio y de los caciques a sus subordinados. Una vez logrado cierto consenso sobre los puntos que contendría el tratado era frecuente que una comisión viajara hacia Buenos Aires, la capital administrativa, para entrevistarse con el mismo presidente o con el ministro de guerra. Era allí donde terminaban de negociarse los términos del acuerdo, que sería firmado posteriormente en la comandancia de frontera o en el toldo del cacique que había fungido como intermediario. Pero en todo este proceso los funcionarios del estado debían respetar las pautas de negociación que los indios entendían como legítimas: los viajes de los representantes de los caciques principales a la

60 Durante este período tomaron forma ciertas pautas que continuaron siendo exigidas por los caciques en el proceso de negociación: el agasajo o regalos a la comisión enviada a proponer un tratado, la utilización de un lenguaraz, el viaje a la capital para la negociación de los puntos centrales, el tiempo de espera para la consulta de estos puntos entre los caciques del grupo (que tendrían su equivalente para la consulta y aprobación de los tratados por las cámaras legislativas), etc.

61 El “middle ground” o “espacio intermedio” ha sido definido por White como la propensión de los actores sociales a actuar en base a los referentes de su contraparte cultural, en función de persuadirlos (White 1991).

capital, los regalos a las comisiones, la provisión de lenguaraces, eran elementos centrales para el éxito de la negociación, y las autoridades de frontera sabían que de no hacerlo se corría el riesgo de que el cacique abandonara su intento.

El carácter predominantemente escrito de los tratados realizados a partir de la década de 1860 constituye sí una novedad en el campo de las relaciones diplomáticas en el siglo XIX. El control de la escritura por parte del sector nacional y el peso preponderante de la oralidad entre los indígenas ha sido considerado como un rasgo de imposición desde los primeros que daba lugar a una situación de dependencia de los segundos. La distancia entre lo acordado y lo escrito en actas obligó en ocasiones a los indígenas a aceptar condiciones que habían sido rechazadas en el proceso de negociación. En este sentido, el manejo preponderante de la oralidad y la escritura por una y otra sociedad, no sólo como forma de comunicación, sino como lugar y forma de verdad, habría creado por sí misma una asimetría entre estos sectores (Tamagnini/Pérez Zavala 2002; Pérez Zavala 2005).

Sin embargo, creemos que debería relativizarse a este factor como causante del desbalance de fuerzas entre ambas sociedades. Trabajos recientes dedicados a reconstruir las “secretarías” indígenas enfatizan el carácter letrado de los caciques que negociaron con el gobierno, los que si bien no siempre tuvieron acceso a la escritura, sí estaban provistos de secretarios y de numerosos métodos de contrastación y vigilancia del contenido de los escritos recibidos y enviados desde las tolderías (Bechis 2008; Pávez 2008; Vezub 2009). Por otra parte, los mismos caciques de distintas parcialidades étnicas solían remitirse entre sí cartas escritas en español, rasgo que indicaba el prestigio de éstos y la importancia de ese tipo de comunicación, además de constituir una vía de comunicación útil para grupos que no siempre solían hablar el mismo idioma.⁶²

Es necesario apreciar la increíble capacidad de transformación e incorporación de nuevos instrumentos por parte de los indígenas y alejarnos de planteos polarizados acerca de sociedades “orales” y sociedades “letradas”. Si el uso extendido de la escritura formó parte de un período de defasaje en la relación de fuerzas entre indios y blancos ello no tuvo que ver exclusivamente con un lugar diferencial de la escritura y la oralidad en ambas sociedades sino con otros factores que permitieron al gobierno nacional concretar en estas décadas su decisión de avanzar las fronteras eliminando la organización indígena (Jong 2005). En este sentido, caracterizar un terreno de acción y comunicación como *middle ground* no supone sostener una equivalencia de los “universos culturales” en relación. De acuerdo con Havard, escapar a este análisis implica subestimar el “paradigma de conquista” subyacente

62 Musters indica la costumbre de las misivas escritas al referirse a los intercambios entre el cacique tehuelche Casimiro y Sayhueque. Por otra parte sostiene que en el encuentro entre Casimiro y Foyel hubo “una breve conferencia entre los dos caciques, aunque conviene recordarlo, ninguno de los dos podía entender el lenguaje del otro” (Musters 1997: 245, 249).

al horizonte de los gobiernos coloniales y republicanos en su relación con las poblaciones nativas.⁶³ Las lógicas sociales que operaban en los distintos sectores o sociedades no se igualaban en estos espacios intermedios, en los cuales pudieron ponerse en práctica formas más sutiles de dominación y manipulación del “otro”. Creemos que la asimetría entre ambas sociedades no tuvo que ver con un diferente dominio de lo escrito para rechazar o aceptar lo acordado formalmente, sino con el lugar en que estos acuerdos ocuparon en la lógica y en la reproducción de estos grupos: para la sociedad estatal, los tratados fueron un medio transitorio y estratégico para eliminar el obstáculo que los indígenas oponían a la ocupación de territorios concebidos como “nacionales”; para los indígenas una práctica de relación intrínsecamente ligada a la gestión de redes políticas y económicas sobre las que basaban su autonomía.⁶⁴ Los grupos indígenas participaron de estas prácticas diplomáticas asimilándolas y adoptándolas, haciéndolas formar parte de una forma de existencia basada en el aprovisionamiento de ganado mediante la ración –o en su defecto el malón–. Pero estas prácticas en manos de los agentes del estado, constituyeron un instrumento de dominación.

Existe un consenso acerca de que un conjunto complejo de factores intervinieron en la aceleración del ritmo de acontecimientos que desembocó en la “conquista del desierto”: desde aspectos accidentales como la muerte del Ministro de Guerra Alsina, hasta políticos, como los que llevaron a dar un lugar prominente a Julio A. Roca como su sucesor; desde la incorporación del fusil Remington –de disparos a repetición, que no exigía recarga– como arma en el ejército, hasta las ventajas comunicacionales del telégrafo para la transmisión de información entre las tropas. Pero nos preguntamos cuáles fueron los factores internos a la lógica de negociación entre estado e indígenas que contribuyeron a esta asimetría y participaron de la acelerada pérdida de la autonomía indígena en el último cuarto del siglo XIX.

Uno de los aspectos por los que los tratados muestran la impronta de los intereses estatales es su escaso o nulo reconocimiento de derechos indígenas sobre los territorios. Como Lázaro Ávila sostiene para los intercambios diplomáticos en las pampas del siglo XVIII –y como Nacuzzi demuestra en su análisis en este volumen–, el “ámbito de consenso” creado por los acuerdos que establecían la paz fronteriza involucraba el explícito respeto de los territorios y la libertad de los habitantes indígenas (Lázaro Ávila 1998: 33). En las últimas décadas de la frontera estos tratados, que acompañaron, por otra parte, intentos paralelos de avanzar las

63 Havard (2003). De acuerdo con este autor, en toda relación colonial una de las partes, con mayor capacidad de manipulación de su contraparte cultural, termina imponiendo su propia visión de las cosas.

64 Vezub (2005). En este sentido estamos de acuerdo con el autor en que la gestión autónoma de redes de negocios por parte de caciques como Sayhueque dependió de las políticas sostenidas de transferencias de recursos del estado. Creemos que los tratados de paz lograron extender, aunque en forma diversa, este efecto a gran parte de la población pampeano-patagónica.

fronteras, tendieron a ser poco explícitos en el reconocimiento de los territorios indígenas, limitándose a comprobar la “ocupación”. Los indígenas o bien no pensaron que el reconocimiento de la propiedad de sus tierras por el estado fuera necesario y aceptaron implícitamente la ausencia de este compromiso, o no pudieron conseguirlo en las negociaciones.

¿Qué se acordaba en los tratados de paz? Estos acuerdos escritos siguieron una formulación general, aunque con cláusulas específicas que fueron cambiando según los grupos y el momento del período en el que se firmaron. Eran establecidos como un acuerdo entre el gobierno nacional, representado por el comandante de frontera, y un cacique principal, su segundo, y frecuentemente otros caciques menores a través también de sus representantes. Entre los artículos básicos se encontraban aquellos que se referían a: 1) la suspensión de hostilidades y concertación de la paz entre las partes; 2) la declaración de la protección de las comisiones o enviados que se acercaran a los puestos de frontera o a las tolderías a comerciar; 3) el compromiso por parte del cacique de transmitir toda noticia relativa a malones a realizarse en las fronteras; 4) el compromiso del cacique y su grupo de estar prontos a apoyar la defensa de la jurisdicción de frontera, ante el pedido de la autoridad del lugar, contra los grupos indígenas que resultaran enemigos del gobierno; 5) el compromiso de ambas partes de entregar cautivos y/o prisioneros del bando contrario; 6) el compromiso del cacique de entregar a las autoridades nacionales a los desertores y refugiados en las tolderías; 7) las raciones que serían provistas periódicamente en las jurisdicciones fronterizas a las comisiones indígenas que se acercaran a retirarlas —que podían ser anuales, semestrales, trimestrales o mensuales, consistentes en ganado en pie, generalmente yeguas, y “vicios”— y los montos de dinero en concepto de “sueldos” al cacique principal, cacique segundo y capitanejos, en correspondencia a su nombramiento bajo cargos jerárquicos de tipo militar; 8) la duración de los tratados, postulados en general como permanentes, en algunos casos sujetos a renovación en un plazo estipulado; 9) frecuentemente, la aceptación, por parte de los caciques firmantes, de la autoridad del cacique reconocido por el gobierno como principal de la jurisdicción o de determinado territorio y/o el compromiso de no aceptar la autoridad de caciques como Calfucurá o Reuquecurá; 10) finalmente, la declaración de los términos de suspensión del tratado, ligada a la desobediencia indígena de alguno de los compromisos asumidos.

Bajo esta formulación general, los tratados tuvieron contenidos específicos, relativos especialmente a los compromisos exigidos a los caciques y seguidores. Destacamos en primer lugar aquellos que establecían compromisos de *orden territorial* con los grupos, en tanto:

- Comprometían al grupo al apoyo expreso a las actividades de exploración y ocupación del río Negro: este aspecto aparece en los tratados realizados desde Carmen de Patagones con las poblaciones tehuelche-huilliche de la costa del

río Negro y de las faldas cordilleranas, como los firmados con Yanquetruz (1857), Chingoleo (1859), Sayhueque (1859, integrando el tratado de Chingoleo, y 1863), Lemunao (1869), Ñancucheo (1872) y Queupumil y Llancamil (1874), entre otros.

- Establecían algún tipo de cesión territorial por los indígenas hacia el estado: este fue el caso del tratado acordado con Yanquetruz (1857), en el que el Artículo 3 expresaba:

el cacique pone ahora a disposición del Gobierno de Buenos Aires, una extensión de trece leguas, desde San Javier para afuera sobre la margen norte del río Negro, para que en el límite de dichas trece leguas, pueda el Gobierno formar una población que se denominará “Guardia de Obligado”.⁶⁵

- Realizaban algún tipo de reconocimiento de los límites o extensión de la ocupación –no de la propiedad– del territorio por el grupo indígena en cuestión: aspecto presente en el tratado realizado con Juan Catriel (1856), Yanquetruz (1857), Sayhueque (1863), con los ranqueles Mariano Rosas y Baigorrita (1872, 1878), con los caciques pehuenches Purrán y Caepe (1872). En este último caso, por ejemplo, el estado reconocía y amparaba la residencia tranquila de los grupos en un determinado territorio, a cambio de que la población indígena admitiera el avance de fortines en una franja territorial cercana:

Art. 1º [...] el Gobierno Argentino se compromete a proteger y amparar la residencia tranquila y permanente de dichos caciques, capitanejos y sus tribus en el territorio que actualmente poseen, hasta la margen derecha del río Grande o Colorado.

Art. 2º En el terreno intermedio de la línea de frontera y el límite fijado para residencia de las tribus, el Jefe de la Frontera podrá establecer los fortines que juzgue convenientes [...].⁶⁶

En 1869 se firma un tratado particular, tanto por el cacique con el que se realiza, Lemunao, un cacique araucano de Pitrufrquén, que había estado en relaciones con Calfucurá, sino también por los términos en que se realiza el acuerdo, que incluye la cláusula de la soberanía territorial, evidenciando la preocupación por asegurar el territorio nacional al este de la cordillera de los Andes:

1º El cacique Limonao con toda su tribu se declara súbdito argentino, y reconoce en el Gobierno General el dominio y soberanía que tiene en todo el territorio de la Repúbli-

65 Estas cesiones no siempre figuraron en los tratados pero fueron posibilitadas por él. Al respecto, Vezub hace referencia a la venta efectuada por el cacique Chingoleo a los señores Murga y Aguirre en la margen sur del río Negro (Vezub 2005).

66 Tratado entre el Gobierno Nacional y el cacique Caepe. San Rafael, 1872. SHE, Caja 34 1181; Levaggi (2000: 459).

ca, que se comprende por la parte oriental de los Andes hasta terminar en el Estrecho de Magallanes.⁶⁷

Esta condición comienza a formar parte de muchos de los tratados firmados en la década de 1870. Lo ejemplifica nuevamente el tratado realizado con Caepe y otros pehuenches en 1872, en el que el gobierno nacional reconoce la “posesión tranquila” de los campos en cuestión:

Artº 10: Los caciques signatarios de este tratado reconocen la soberanía de la República Argentina sobre todo el territorio de la República y el Gobierno Argentino reconoce a las tribus del cacique principal Caepé y sus subordinados la posesión tranquila de las tierras que ocupan hasta el límite fijado por el Art. 1º mientras [dure] el presente convenio de paz.⁶⁸

También desde la década de 1870 comienzan a integrar los tratados cláusulas por las que se intenta fortalecer la figura de los caciques principales y asegurar el ejercicio de su autoridad mediante el envío de tropas del ejército a los toldos, que puedan ser utilizadas por el cacique para su propia protección y para asegurar la obediencia de sus seguidores. Encontramos este tipo de acuerdo en los tratados negociados con Mariano Rosas y Baigorrita (1870), Cipriano Catriel (1870), (Caepe 1872), Purrán, Llancaqueo y Aillal (1872), entre otros:

Art. 6º [...] en el caso de ser alguna vez desconocida la autoridad del cacique principal Caepé por una parte de los indios, el Jefe de la Frontera cooperará a restablecer la obediencia de los indios a su cacique considerándose como enemigo común la tribu que se rebelase.⁶⁹

Este aspecto no nos parece menor, ya que bajo la apariencia de un recíproco respeto y reconocimiento de los órdenes políticos del otro, al apoyar mediante la fuerza la obediencia de los seguidores de un cacique, el estado estaba interviniendo en fijar jerarquías y representantes, invirtiendo de esta manera la lógica consensual que residía tras las decisiones y acciones políticas en las sociedades segmentales. En este sentido, la intervención de los tratados se producía simultáneamente en el orden territorial, jerárquico, político y económico al mismo tiempo, comprometiéndolo al cacique y a su grupo a responder a un conjunto de condiciones en reciprocidad a las raciones, sueldos, grados militares, redes de negocios y prestigio habilitados por los tratados.

Una parte significativa de los tratados realizados en estas décadas establecían algún tipo de reubicación territorial del grupo junto a su cacique, acompañada en algunos casos de la promesa de apoyo en recursos para la producción agrícola: este fue el compromiso asumido por los caciques Chagallo, Sinchel, Huincabal o Inaca-

67 AGN, Memoria de Guerra (1870: 292-294).

68 SHE, Caja 34 1181; Levaggi (2000: 459).

69 SHE, Caja 34 1181, Levaggi (2000: 459).

yal, Quiñifero, Lemunao, Menquelao, Queupumil y Yancamil, entre aquellos que trataron por Carmen de Patagones. Pero la reubicación de estos grupos también fue un aspecto de todos aquellos tratados que acompañaron el ingreso de nuevos indios amigos a la frontera, como en el caso de los caciques que se instalaron en Bahía Blanca (Ignacio, Najpichún, Cañumil, Guayquil), en Azul y Tapalqué (Manuel Grande, Quentrel) y en el oeste bonaerense (Coliqueo, Raninqueo).

Aunque no hemos podido acceder a todos los tratados que se han conservado, aquellos que implicaron el asentamiento de los grupos en un punto fijo parecen haber estado integrados por cláusulas que exigían, al mismo tiempo, prestaciones militares por un número fijo de lanceros, que debían presentar revista mensualmente ante las autoridades del punto. Entre estos encontramos varios casos, como los de Chingoleo (1865), Inacayal (1863) y Queumpumil, Llancamil y Guenupil o Quempil (1874) en los que se estipula la asignación de raciones bajo tiempos, montos y formas equivalentes a los integrantes del ejército y las guardias nacionales, excluyendo la labor de recepción de las comisiones y concentración y redistribución de los caciques. Estos últimos, en el tratado verificado el 1° de septiembre de 1874, quedan comprometidos a trasladarse con 450 indios de lanza y sus familias a la costa del río Colorado, a defender los puntos de Patagones y Bahía Blanca cuando les fuera solicitado, realizar descubiertas sobre Salinas Grandes para prevenir invasiones, y participar de expediciones contra indios enemigos realizadas por el ejército del gobierno nacional. Este tratado ya no especifica raciones especiales según una jerarquía interna, sino un sueldo equivalente al de los soldados del ejército, además de la promesa de tierras e instrumentos de labranza “si estos quisiesen trabajar”.⁷⁰ Según Levaggi, los tratados se simplificaban a beneficio del estado y ya no tenían el carácter político de antes, por el que se asignaban raciones bajo el compromiso de no invadir. Se compensaba con sueldos militares las tareas asignadas a los indios, bajo lo que pasaba a parecerse a un contrato de derecho interno, muy alejado de los convenios internacionales del período hispánico y del carácter político asumido durante el período republicano (Levaggi 2000: 477).

3. Los efectos sesgantes de los tratados de paz

Aunque evidentemente existieron distancias entre la letra de los tratados y los términos en que éstos fueron cumplidos, la formulación de los mismos nos indica la orientación de los objetivos de una y otra parte en las negociaciones diplomáticas. A su vez, la reconstrucción de esta política en paralelo a la evolución de las relaciones con distintos sectores indígenas nos ha permitido acercarnos a los efectos deseados y no deseados de la misma. Creemos, en este sentido, que estos acuerdos destinados en lo formal a sostener un trato pacífico entre el gobierno na-

70 SHE, Caja 38 1239, en Levaggi (2000: 477).

cional y distintos sectores indígenas, fue transformando sutil e imperceptiblemente la dinámica política y económica indígena y ubicando progresivamente a estas poblaciones en una situación de mayor dependencia hacia las relaciones con el estado. Distinguimos al menos tres aspectos interrelacionados en los que pueden identificarse estos efectos sesgantes.

3.1 Dependencia económica hacia el sistema de raciones y comercio

Las “relaciones pacíficas” se basaban principalmente en acuerdos de racionamientos periódicos a los caciques principales, a través de los cuales se redistribuían los recursos hacia sus subordinados. La práctica de dar agasajos y proporcionar raciones periódicas en función de los tratados de paz se convirtió en un nexo económico y social (Foerster 2007), incrementando la dependencia material de los indígenas. El modo y el alcance de este flujo de raciones sobre las economías indígenas recién comienzan a ser analizados (Vezub 2005; 2009), pero distintos indicios nos inclinan a pensar que estrecharon la dependencia económica de estos grupos hacia los recursos y productos provistos por el gobierno y a fortalecer el prestigio de los caciques que participaban en estos tratados (Morrone 2004; Jong 2007). Sin embargo, este factor tuvo resultados heterogéneos a nivel de los liderazgos indígenas: mientras que en estos años los vínculos con el estado permitieron a caciques como Sayhueque un incremento de su ascendencia e incluso de su poder (Vezub 2009), líderes como Calfucurá vieron disminuir su influencia en el campo político indígena. El retorno a las relaciones pacíficas implicó una limitación a las alianzas capitalizadas por Calfucurá, ya que sus principales aliados inician negociaciones independientes con el gobierno. A este “desgranamiento” de la Confederación Indígena se agregó un proceso similar con aliados más cercanos y permanentes, integrantes de su cacicato, que gestionan tratados en la frontera bonaerense para instalarse allí como “indios amigos”. Este cacique, en su faceta de “líder gestor de raciones en tiempos de paz” vio seguramente restringida la influencia adquirida como “líder malonero en tiempos de guerra”. El manejo selectivo de las raciones asignadas a distintos caciques debe haber influido en estos caminos divergentes del liderazgo en el campo indígena. Mientras Sayhueque solicita y obtiene reiteradas veces (1863, 1866, 1872 y 1874) (Vezub 2005) un aumento de las raciones asignadas por tratados, sabemos que Calfucurá percibía formalmente un tercio de los montos que acostumbraba recibir durante el gobierno de Rosas, sufriendo reducciones aún más sustanciales desde el año 1868.

3.2 Dependencia política de los funcionarios indígenas hacia el estado

En tanto representante destacado por las relaciones diplomáticas, el cacique tiende a favorecer el cumplimiento de los compromisos exigidos por el estado por parte del grupo que representa. En el contexto de la relación generada por los tratados, y

para desempeñar exitosamente su papel ante el estado, el cacique necesitaba garantizar la fidelidad de sus representados a los compromisos asumidos. A su vez, en función de representar a sus seguidores, debía obtener del estado las compensaciones suficientes para reproducir la obediencia de sus “subordinados”. En otras palabras, el cacique ponía el “nombre propio” (el prestigio y la trayectoria que lo habían convertido en legítimo representante de la voluntad de los suyos) a funcionar como “institución”, es decir, debía garantizar ante el estado la reproducción de ese lazo y del efecto resultante, la “obediencia” de sus seguidores (Pávez 2008: 98). Esta ubicación convirtió al cacique en un funcionario permanentemente abocado a “trabajar” esta doble articulación. Si bien puede discutirse si el incremento de los recursos provenientes del estado fueron capitalizados y transformados en un “poder” de calidad distinta a la “autoridad” tradicionalmente revestida por los caciques, creemos que la dinámica diplomática incrementó la dependencia de los propios funcionarios indígenas hacia su relación con el estado, impulsándolos a hacer lo posible para suscitar la obediencia o, como Foucault denomina al poder, ejercer “la acción sobre la acción” de los suyos (Foucault 1979: 32). Los caciques realizaban así un verdadero “trabajo”, palabra que empleaban frecuentemente para aludir a sus gestiones para mantener la paz, controlando y persuadiendo a los “subordinados” para no invadir, devolver cautivos, etc. Era este un “trabajo” que apuntaba a cristalizar la flexibilidad de las adscripciones políticas, consolidando un vínculo estable entre representante y representados. Por otra parte, al estipular el cumplimiento de compromisos en el futuro, los tratados fuerzan e invierten el carácter de la adhesión política al cacique en la sociedad indígena. Ya no es el cacique el que obedece la decisión colectiva de su grupo para firmar un tratado, sino el grupo el que se compromete a obedecer al cacique destacado y sostenido por el tratado de paz. Esta “inversión” –imperceptible en las formas– de la obediencia entre caciques y seguidores convierte a los caciques en funcionarios del estado en el mundo indígena. En este proceso se comprende la intención del estado de proteger y hacer respetar a los caciques funcionales a las relaciones con el estado y las ofertas de apoyo militar para hacer respetar su autoridad por sobre los seguidores “rebeldes” o “insubordinados”.

3.3 “Troquelado” de las alianzas en el campo político indígena

En la configuración de un mismo campo indígena en relación con el estado, lograda por la novedosa extensión y sistematicidad de la expansión de tratados, la estructura segmental de la organización política indígena respondió con éxito a la estrategia estatal de diversificación y multiplicación de cabezas negociadoras. El lugar de los caciques como intermediarios y articuladores con el estado favoreció el descentramiento político de la sociedad indígena y el “ejercicio multitudinario de la soberanía” –rasgo que Pávez aplica a la sociedad mapuche de ambos lados de la

Cordillera durante el siglo XIX– (Pávez 2008: 30). La diferenciación de intereses al interior del campo político indígena, que se expresa en posturas distintas ante el avance territorial del estado, constituye así otro efecto sesgante asociado a la mayor dependencia económica y política de los grupos pampeano-patagónicos creada por la política de tratados de paz. Este dispositivo de poder ordenó el mapa político indígena, condicionando las alianzas de aquellos grupos que podían plantear mayor resistencia ante un avance territorial y colaborando a crear “lugares políticos” diferentes: para algunos sectores los tratados aseguraron una modalidad pacífica de obtención de ganado a partir del abastecimiento en base a raciones periódicas y el intercambio comercial en los puntos de frontera, que no eran percibidos como contradictorios con los planes estatales de exploración y ocupación del territorio pampeano y patagónico. Si este parece haber sido el caso de los caciques huilliches, manzaneros y tehuelches, distinta fue la dinámica de relación con salineros y ranqueles, cuyos aduares se encontraban ubicados en los territorios más próximos a la frontera. Para otros, como los “indios amigos” se configuró un espacio inestable de inserción económica y política en las fronteras. Salvo casos puntuales, la política estatal buscó la alianza estratégica con éstos sin abrir otras posibilidades sistemáticas o de largo plazo para su incorporación a la ciudadanía. Estos grupos fueron selectiva y alternativamente vistos como *indios* (en su acepción de “otro”, “salvaje”, “enemigo”) y *amigos* (en tanto aliados a los proyectos “civilizadores”), permaneciendo en un espacio ambiguo de pertenencia y exclusión de la sociedad de fronteras (Jong 2008).

4. Consideraciones finales

ya se lisonjea a los indios, ya se les amenaza, ya se les llama, ya se les combate, ya se les utiliza, ya se les engaña. Ya se les dice hermanos de raza, hermanos de armas, y de hecho sus contingentes de caballería han actuado en los combates de la Independencia y en la guerra civil; ya a consecuencia de una mala jugada de su parte, no se trata sino de exterminarlos; finalmente, se trata con ellos (Ébélot 1968: 49).

Iniciamos este trabajo planteando la necesidad de analizar las políticas de estado para entender el tenor de las transformaciones políticas de la sociedad indígena en la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, planteamos una crítica hacia aquellas propuestas que asociaban las unidades políticas indígenas con grupos étnicos liderados por “grandes caciques” –cuya riqueza y prestigio habían sido obtenidos en base a las empresas maloneras–, sin analizar la influencia de las relaciones con el estado sobre el campo político indígena. Creemos haber propuesto elementos que permiten plantear efectos sesgantes de la relación con el estado que, en contraste con una generalización de las “grandes jefaturas”, ofrecen un panorama de transformaciones heterogéneas.

A partir de la reconstrucción realizada en los capítulos anteriores se deduce, en primer lugar, que la acción política indígena asumió formas dinámicas y complejas, no siempre coincidentes con demarcaciones étnicas o bajo liderazgos estables. Los rasgos plásticos propios de la organización segmental se expresaban en la formación y fisión de confederaciones políticas de corta duración, incluso con sectores de población no indígena. Percibimos, sin embargo, que las prácticas diplomáticas empleadas por el estado en estas décadas apuntaron a intervenir sobre esta flexibilidad, a diferenciar segmentos y a fijar un orden de relaciones entre ellos. El carácter sistemático y ampliado que asume la política de tratados de paz y las relaciones de dependencia política y económica favorecidas por ella pueden ser considerados entonces como factores inherentes a la conformación de las unidades políticas indígenas que encontramos hacia el fin de este período.

El análisis de los tratados de paz desplegados por el gobierno nacional entre 1856 y 1878 nos permitió caracterizar esta política por su centralidad, sistematicidad, reticularidad, continuidad y selectividad, rasgos que colaboraron a reorganizar un mapa político indígena que en los primeros años de la década de 1850 había dado pruebas de su capacidad de confederación para confrontar con las fuerzas nacionales. La práctica de tratados diversificó los procesos de negociación a partir de la creación de un vínculo con caciques de importancia, que se convirtieron en representantes políticos más estables y reconocidos, tanto desde el estado como desde las comunidades políticas a las que representaban. En la segunda mitad del siglo XIX, por tanto, el fortalecimiento del rol del cacique tuvo que ver básicamente con su papel de articulador político con el estado en el marco de las políticas de tratados de paz, más que con un proceso de acumulación de riquezas y prestigio derivados de la actividad malonera.

La política de tratados estableció relaciones relativamente duraderas y pacíficas con algunos grupos y bastante más inestables y conflictivas con otros. Puede reconocerse una cierta estabilidad de las relaciones diplomáticas desarrolladas desde la jurisdicción de Carmen de Patagones con las poblaciones indígenas ubicadas en las márgenes del río Negro y la zona cordillerana entre los ríos Limay y Barrancas, involucrando a los grupos y caciques que en las fuentes aparecen clasificados como tehuelches, huilliches, manzaneros y pehuenches o picunches. Estos grupos dejaron de participar o participaron mínimamente en los malones políticos de las décadas de 1860 y 1880. Por el contrario, la inestabilidad diplomática se concentró con los grupos ubicados al oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba y San Luis, conocidos como salineros y ranqueles y asociados a sus líderes principales: Calfucurá, Mariano Rosas y Baigorrita.

En contraste con el carácter central de la política de tratados de paz del estado, la acción política indígena en estas décadas se produjo desde diversos centros, o instancias de negociación, y fue cada vez más heterogénea, es decir, se fueron perfilando sectores con diferentes posturas hacia el estado. La imagen del *troquelado*

del campo de alianzas indígenas es la que se nos presenta para ilustrar los cambios en la organización política de la sociedad indígena ante los intentos de avance estatal sobre el territorio de Pampa y Patagonia. Este troquelado está asociado a la limitación de los grandes liderazgos, especialmente el de Calfucurá, y al surgimiento de líneas de fragmentación que recorren la delimitación de caciques-seguidores-territorios favorecidos por los tratados de paz.

Es por ello que el carácter segmental es fundamental para problematizar las relaciones y contradicciones entre la agencia y la resistencia de la comunidad política indígena en su conjunto. Si bien la política de tratados de paz supuso procesos de dominación sutiles y creativos, orientados a fragmentar las alianzas indígenas, también las complejas y contradictorias estrategias de la resistencia indígena, orientadas a afirmar la individualidad de la representación, implicaron tanto la resistencia como la colaboración política, pero en definitiva impidieron no sólo la formulación de unidades superadoras de esta segmentalidad sino que provocaron la cristalización de estos segmentos. Sin estas contradicciones no es posible comprender adecuadamente las relaciones de dominación, que se establecieron a través de dependencias económicas y políticas que diversificaron los intereses en el campo indígena. El indicador de esta fragmentación es la incapacidad de unirse y confrontar u oponer fuerzas ante los avances que el estado iniciará a fines de la década de 1860 y que incrementará a lo largo de la siguiente.

Se trató de sociedades cuya resistencia se basó en la afirmación de su heterogeneidad, en la individualidad de sus representantes (Pávez 2008). Los tratados alimentaron un tipo de representación política –el cacique principal– que iría volviéndose más dependiente del prestigio y bienes obtenidos a partir de la negociación con los blancos. Pero esta fue una práctica de resistencia cuyo agotamiento quizás fue comprendido demasiado tarde. La práctica de tratados no permitió a los indígenas transformar al otro en función de sus intereses, sino que incrementó la dependencia de cada segmento hacia el estado central.

Esta fragmentación de las alianzas construidas por Calfucurá durante la primera mitad del siglo XIX parece haberse compensado por el fortalecimiento de los vínculos con sus tradicionales aliados de la Araucanía. La alianza entre los salineros y caciques arribanos, que durante parte del período también integró a los ranqueles, continuó siendo el eje central de la capacidad de confrontación indígena con el gobierno. No sabemos aún si la reiterada presencia de estos grupos provenientes del oeste cordillerano derivaba de una convocatoria política pampeana o si tenía su origen en la demanda de ganados por parte de estos grupos. Pero seguramente una vez en tierras pampeanas su presencia significó una presión por aprovisionarse de ganado mediante ataques a la frontera que los caciques en tratos con el gobierno, como Calfucurá, difícilmente pudieran evitar. Parece claro, no obstante, que este jefe intentó preservar a las localidades del sur bonaerense –donde se hallaban varios de sus anteriores aliados y parientes, donde comerciaba y recibía racio-

nes— de estos ataques. De hecho, durante la década de 1860, la frontera bonaerense quedó libre de los grandes malones que había sufrido durante la década anterior. Una vez que Calfucurá entra en tratados de paz, los malones de mayor envergadura se realizan en la frontera de Córdoba. Cuando éstos se dirigieron hacia las secciones oeste y sur de la frontera, como los realizados a fines de 1865, Calfucurá parece haber alertado previamente a las comandancias. Los ataques a la frontera sur y oeste retornan recién en la década de 1870, cuando los avances fronterizos, la represión a los indios amigos y el incumplimiento en la entrega de raciones quiebran las relaciones diplomáticas con Salinas Grandes.

El papel de la asistencia económica y militar entre los grupos salineros y araucanos en estas últimas décadas de existencia de la frontera ha sido destacado ya por algunos autores, quienes han propuesto que de no mediar la “Conquista del Desierto” y la “Pacificación de la Araucanía”, estos lazos se hubieran robustecido bajo la forma de una confederación permanente (León Solís 1981; Zapater 1982). Aunque este es un tema que requiere mayor análisis, sí parece claro que en el contexto de la fragmentación de alianzas en el espacio pampeano —que Calfucurá intentó recomponer mediante constantes envíos de comisiones a distintos caciques— y el desplazamiento de los focos de conflicto entre distintos sectores de la frontera, las alianzas transcordilleranas cumplieron un rol fundamental en la resistencia al avance territorial de los estados argentino y chileno. Resulta en este sentido significativo que ambos grupos fueran progresivamente aislados de sus alianzas políticas regionales en base a las prácticas de la diplomacia estatal.⁷¹

La lógica de la ración, el malón y el comercio, como base del vínculo con los blancos a lo largo de tres siglos, definía por sí misma un callejón sin salida para los intereses políticos indígenas, en tanto sólo podían imponerse por la fuerza a una sociedad estatal orientada productivamente hacia el Atlántico. El ciclo *malón-tratado-malón*, cuya dinámica era impuesta por la sociedad indígena, fue paulatinamente reemplazado por el de *tratado-malón-tratado*. La sociedad indígena en tanto “comunidad política” fue perdiendo su capacidad de imponer sus términos de relación con el Estado —es decir, fue siendo cada vez menos efectiva su estrategia de buscar el conflicto para negociar en mejores términos—. El conflicto comenzó a ser provocado cada vez más por el estado —a través de avances territoriales, incumplimiento de los tratados, agresiones directas a los indígenas— y los tratados fueron renovándose por sobre la aceptación del avance del estado por parte de ranqueles (a través de los tratados de 1865, 1870, 1872, 1878) y salineros (1861, 1866, 1870).

71 Obras clásicas de tempranos historiadores, como las de Tomás Guevara, o los informes del General José Pinto, publicados en la década de 1870, permiten una primera comparación de estos procesos, prometiendo significativas similitudes acerca del uso de los tratados de paz como dispositivos de poder en el avance fronterizo.

En este sentido –y más allá de los proyectos y concepciones alternativas presentes en los discursos legislativos de la época, dirigidas hacia la incorporación de la población indígena a la vida social y económica nacional–, queremos destacar la íntima conexión entre las prácticas diplomáticas efectivamente aplicadas por el estado y los objetivos de ocupación militar de las tierras indígenas. En contraste con una visión de la política estatal de tratados de paz como asociada a un discurso pacifista, con objetivos de inclusión de la población indígena a largo plazo, intentamos destacar aquí su papel estratégico en las prácticas de dominación, como elemento de control e intervención en el orden político indígena y la desarticulación de su resistencia ante el avance territorial del estado. Lejos de mantener una práctica exclusivamente militar, como la que sustenta la historiografía tradicional sobre las fronteras, el estado hizo uso también de la persuasión; la persuasión de las raciones, los sueldos, los regalos, los títulos honoríficos y el prestigio. Llamamos la atención sobre estas formas sutiles, basadas en el conocimiento del otro y su manipulación, que creemos pasaron fundamentalmente por el fortalecimiento y refuncionalización de la figura del cacique. Hemos así intentado plantear la heterogeneidad y complejidad propia en las lógicas políticas que acompañaron el proceso de dominación estatal, el que no sólo operó en base a la coerción sino a través de los dispositivos diplomáticos. Éstos operaron sobre las lógicas y los sentidos de la autoridad política indígena, tejiendo una trama de dependencias económicas y políticas que contribuyeron a profundizar la asimetría entre indígenas y estado nación.

Apéndice documental: transcripción de cinco tratados de paz

Tratado de paz entre el Gobierno del Estado de Buenos Aires y el cacique Don José María B. Llanquitrutz. Buenos Aires, 24 de mayo de 1857

Deseando el cacique del Sud, Don José María B. Llanquitrutz, establecer una paz sólida y duradera con el Gobierno del Estado de Buenos Aires; y deseando éste prestar al dicho cacique todo el apoyo y protección que les sean posibles, de manera que todo redunde a favor de la seguridad y el bien del país, en general: han convenido ambos en ajustar y celebrar el arreglo comprendido en los quince artículos siguientes, que prometen solemnemente y se obligan a cumplir con entera exactitud y lealtad:

Art. 1º Todas las tribus e indias dependientes del cacique Llanquitrutz, o amigos de él, podrán ir libremente a comerciar en el pueblo del Carmen, y en cualquier otro del Estado de Buenos Aires, y las personas, como también los animales y efectos que conduzcan, o que lleguen a adquirir allí legítimamente, serán completamente respetados y protegidos. De igual modo, todo habitante de cualquier punto del Estado de Buenos Aires, que quiera ir a comerciar entre dichas tribus e indias, podrá hacerlo libremente; y su persona, como también los animales y efectos que conduzca o que llegue a adquirir allí legítimamente serán completamente respetados y protegidos.

Art. 2º El cacique Llanquitrutz reconoce que sus antepasados cedieron por tratados al antiguo Gobierno del rey de España las tierras que se conocen por de Patagones, hasta San Javier.

Art. 3º Además: el dicho cacique pone ahora a disposición del Gobierno de Buenos Aires, una extensión de trece leguas, desde San Javier para afuera sobre la margen norte del río Negro, para que en el límite de dichas trece leguas, pueda el Gobierno formar una población que se denominará “Guardia de Obligado”, y que será destinada a procurar la civilización y adelanto de los indios.

Art. 4º El Gobierno de Buenos Aires encarga al cacique Llanquitrutz el formar con su gente dicho pueblo, en terreno de labranza, y de manera que él pueda estar a la vanguardia de Patagones sobre la Pampa y para su primer fomento entregará al cacique Llanquitrutz algunas herramientas, arados, bueyes y granos para siembra; en el concepto de que los ranchos se construirán con las maderas y pajas que allí se producen: pudiendo el cacique Llanquitrutz hacer detentar el pueblo y las quintas del modo que crea mejor; pero deberá dejarse una gran plaza, donde más adelante hará el Gobierno construir una iglesia y casa de escuela, para la instrucción de los indios.

Art. 5º Se declara al cacique Don José M^a B. Llanquitrutz, comandante en jefe de todo el territorio de la Pampa, que es adyacente a la jurisdicción de patagones, y en cuya posesión se halla hoy.

Art. 6º Si el Gobierno de Buenos Aires determinase poblar o fortificar la isla de Choelechoel, o algún otro punto militar en todo el curso del río Negro, el comandante Llanquitrutz le prestará todos los auxilios de brazos y demás que le sean posibles, y los cuales serán debidamente remunerados y pagados por el Gobierno para lo cual celebrará con el comandante Llanquitrutz el competente arreglo.

Art. 7º El comandante Llanquitrutz vendrá a establecerse y fijar su residencia en el paso de Valcheta, como cincuenta y cinco leguas afuera de Patagones; y aunque él declara que

puede disponer de más de mil hombres de armas, con todo, deseando no ser muy gravoso al Gobierno, sólo vendrá con una fuerza de ochenta hombres, y además ocho caciques.

Art. 8° La fuerza de que habla el artículo anterior, se pone a las órdenes del Gobierno de Buenos Aires; y el comandante Llanquitrúz gozará, como jefe inmediato de ella, de la clase de capitán con grado de teniente coronel, y el sueldo mensual de mil doscientos pesos: cada uno de los dichos ocho caciques tendrá el sueldo de cien pesos mensuales; y cada uno de los ochenta hombres, el de cincuenta. Se dará también a cada uno de los ochenta hombres, y una vez cada año, el vestuario de un gorrete, una camiseta o blusa, un chiripá, dos camisas y dos calzoncillos. Se dará, además, al comandante Llanquitrúz, cada seis meses, un tercio de yerba, una barrica de azúcar, seis arrobas de fariña, un rollo de trabajo, y ciento sesenta cuadernillos de papel. Todos estos artículos, como también el dinero para dichos sueldos, se pondrán por el Gobierno en Patagones, donde el comandante Llanquitrúz mandará a recibirlos; pero no se entregarán los artículos, ni correrán los sueldos sino, desde que el comandante Llanquitrúz venga realmente a situarse con dicha fuerza en Valcheta.

Art. 9° De igual modo, para la mantención de dicha fuerza, se entregarán al comandante Llanquitrúz cincuenta yeguas todos los meses; y cuando no hubiese yeguas, se le entregarán cincuenta pesos por cada una de ellas.

Art. 10° El comandante Llanquitrúz se obliga a estar siempre pronto con dicha fuerza para proteger y apoyar la defensa de Patagones, obrando a las órdenes del comandante de este punto, y según las instrucciones que de él recibiere.

Art. 11° Deberá también el comandante Llanquitrúz: 1° Establecer un correo, que cada quince días, vaya desde el punto de su residencia al pueblo del Carmen; 2° Transmitir al comandante de Patagones, y a cuantas autoridades del Gobierno le sea posible, toda noticia que adquiriera acerca de intentos o movimientos de indios enemigos; 3° Vigilar y defender las costas marítimas del territorio que queda bajo su mando, contra cualquiera que intente apoderarse o establecerse en ellas, sin previo permiso del Gobierno de Buenos Aires.

Art. 12° Serán indios enemigos del comandante Llanquitrúz todos los indios que sean enemigos del Gobierno de Buenos Aires; y si fuese atacado u hostilizado por algunos de ellos, recibirá de las fuerzas y de las autoridades del Gobierno toda la protección y auxilios que fuesen posibles, según sean las circunstancias del caso.

Art. 13° En caso que el Gobierno resolviese atacar o expedicionar contra indios enemigos, estará obligado el comandante Llanquitrúz a ponerse en campaña con una columna, que no deberá bajar de quinientos hombres; debiendo obrar en todo con sujeción a las órdenes que le comunique el jefe o autoridad que el Gobierno designe a tal efecto.

Art. 14° Llegado que sea el caso del artículo anterior, el comandante Llanquitrúz y los caciques, caciquillos y soldados que compongan la columna, recibirán mientras dure la campaña los sueldos que entonces se fijarán y serán además alimentados por cuenta del Gobierno; para todo lo cual, estas fuerzas serán revistas cuando el Gobierno lo disponga, por medio del comisionado que al efecto nombrará.

Art. 15° Estando hoy el comandante Llanquitrúz en posesión de la parte sud del río Negro, en todo el curso de este río, y en posesión, por consecuencia, de todos los pasos de él, se obliga también a oponerse absolutamente, y a impedir por todos los medios, a que pase cosa alguna a la parte norte, sean indios o negociantes, armas, efectos o animales.

Y en fe de todo lo que queda pactado, se firman dos ejemplares de un tenor, que serán ambos sellados con el gran sello del Estado de Buenos Aires a veinticuatro de mayo de mil ochocientos cincuenta y siete.

Valentín Alsina José M^a B. Llanquitrus (sic)

José Matías Zapiola Secretario
José del Carmen Márquez

Fuente: AGN (Sala X, Legajo 27-7-6).

Tratado de paz entre el Gobierno de la República Argentina y el cacique Seihueque. Presumiblemente mayo de 1863.

El cacique Seihueque, deseando establece una paz sólida y duradera con el Gobierno de la República Argentina, y deseando éste prestar a dicho Cacique todo el apoyo y protección que le sea posible de manera que todo redunde a favor de la seguridad y del bien del país en general, han convenido ambos en ajustar y celebrar el arreglo comprendido en los artículos siguientes, que se prometen solemnemente y se obligan a cumplir con entera exactitud y lealtad.

Artículo 1º La tribu e indios del Cacique Seihueque, y los amigos de él podrán venir a comerciar en el pueblo del Carmen y en cualquiera otro de la República Argentina; y las personas, como también los animales y efectos que conduzcan, o que lleguen a adquirir legítimamente, serán completamente respetados y protegidos. De igual modo, todo habitante de la República Argentina que quiera ir a comerciar con dicha tribu e indios podrá hacerlo libremente, y su persona, como también los animales y efectos que conduzcan o que lleguen a adquirir legítimamente, serán completamente respetados y protegidos.

Art. 2º Si el Gobierno de la República Argentina determinase explorar el río Negro u ocupar algún punto militar en todo el curso de él, el Cacique Seihueque le prestará todos los auxilios que le sean posibles, los que le serán debidamente remunerados y pagados por el Gobierno.

Art. 3º El Cacique Seihueque se obliga a estar siempre pronto con su indiada para proteger y apoyar la defensa de Patagones, obrando a las órdenes del Comandante de este punto, y según las instrucciones que de él recibiere.

Art. 4º Queda obligado el Cacique Seihueque a transmitir al Comandante de Patagones y a cuantas autoridades le sea posible toda noticia que quiera acerca de intentos o movimientos de indios enemigos.

Art. 5º El cacique Seihueque reconoce al Cacique Chingoleo por amigo del Gobierno y Jefe de los Campos, y serán indios enemigos del Cacique Seihueque todos los indios que sean enemigos del Gobierno; y si fuese atacado y hostilizado por alguno de ellos recibirá de las fuerzas y de las autoridades del Gobierno toda la protección y auxilio que fuesen posibles, según sean las circunstancias del caso.

Art. 6º En caso que el Gobierno resolviese atacar o expedicionar contra indios enemigos, estará obligado el Cacique Seihueque a ponerse en campaña con todos sus indios,

debiendo obrar en todo con sujeción a las órdenes que le comunique el Jefe o autoridad que el Gobierno designe al efecto.

Art. 7º Llegado que sea el caso del artículo anterior, el Cacique Seihueque, los capitanes y soldados de que se componga su tribu, recibirán mientras dure la campaña los sueldos que entonces se fijarán, y serán además alimentados por cuenta del Gobierno; para todo lo cual serán revistados cuando el Gobierno lo disponga.

Art. 8º El cacique Seihueque gozará seiscientos pesos mensuales, debiendo revistar en la lista donde lo hacen los de Chingoleo y Huincabal.

Art. 9º El Gobierno se obliga a dar cada año al Cacique Seihueque cien yeguas, un tercio yerba, seis damajuanas ginebra, una barrica azúcar, un rollo tabaco, y una resma papel, y a vestir a todos sus indios, hasta el número de cincuenta; dándoles un vestuario fino para el Cacique y seis capitales, un sombrero, un poncho de paño, una camiseta, un chiripá, un par calzoncillos, un par botas, y un pañuelo de seda; y para los soldados, una camisa, un chiripá, un par calzoncillos. Y en fe de lo que queda pactado se firman dos ejemplares de un tenor firmados por el Sr. Comandante del punto Tte. Cnel. Don Julián Murga, en representación el Exmo. Gobierno de la República Argentina, y por el Cacique Seihueque, firmando a su ruego el Sr. Don José Rial; los que serán sellados con el sello de la Comandancia y sometidos al Exmo. Gobierno para su aprobación.

Julián Murga
José Rial
Testigo Benito Chingoleo

Fuente: AGN (Sala VII, legajo 723, ff. 490-491).

Convención de paz ajustada entre el Gobierno de la Nación y el cacique Dn. Juan Calfucurá. Buenos Aires, 12 de octubre de 1866

El Gobierno de la República y el cacique general Dn. Juan Calfucurá y demás caciques que obedecen sus órdenes por sí y a nombre de sus respectivas tribus, con el objeto de poner término a la guerra y regularizar para lo sucesivo las condiciones de amistad y comercio han estipulado la siguiente convención de paz.

Artículo 1º Queda establecida paz y amistad permanente entre el Gobierno y el cacique general Dn. Juan Calfucurá y los caciques que obedecen a sus órdenes.

2º El Gobierno de la República a fin de proporcionarles los medios de subsistencia, les dará cada tres meses los artículos siguientes: mil doscientas libras de yerba, seiscientas de azúcar, quinientas libras tabaco, quinientos cuadernillos papel, dos mil libras fariña, doscientos frascos aguardiente, ocho id. vino, setenta y dos botellas vino Burdeos, dos carretas maíz, dos mil yeguas, debiendo recibir dichos artículos en Azul.

3º El Gobierno permitirá a estas tribus hacer boleadas en los campos que ocupan para su comercio de peletería pero bien entendido que estas boleadas no podrán por ningún motivo hacerse en los campos de propiedad pública y particular y mucho menos en los campos que ocupan las tribus amigas de Catriel, Cachul etc. ni aún en los que éstos hacen sus boleadas.

4° Queda establecido el comercio entre el Gobierno y las tribus del cacique general Calfucurá y los caciques que obedecen sus órdenes con sujeciones policiales y bajo el conocimiento de las autoridades de la frontera por el Azul, Tandil y Bahía Blanca.

5° Los hijos del cacique general Dn. Juan Calfucurá y demás caciques que obedecen a sus órdenes podrán ser educados en las escuelas del Estado establecidas en el Azul y en la Capital bajo la protección y auxilios del Gobierno.

6° Si algunos desertores del Ejército o criminales se refugiasen en las tribus del cacique general Dn. Juan Calfucurá y demás que obedecen sus órdenes, los entregarán inmediatamente al Jefe de la Frontera.

7° El cacique general Dn. Juan Calfucurá, y demás caciques que obedecen sus órdenes se comprometen bajo la lealtad de su palabra a observar y cumplir fielmente todo lo estipulado en esta convención y a no recurrir a las armas jamás para hostilizar el Estado, y el Gobierno por su parte respeto y garantías a sus personas y familias.

9° La presente convención será firmada por el Jefe del Departamento del Sud, por el cacique general Dn. Juan Calfucurá y demás caciques que obedecen sus órdenes, por los Jefes de la División y por las autoridades del pueblo de Azul, haciéndose tres copias de las cuales dos reservará el Gobierno y una le será entregada al cacique Calfucurá.

Hechos en Buenos Aires en el palacio del Gobierno a doce de octubre de mil ochocientos sesenta y seis.

A ruego por el Sr. General Dn. Juan Calfucurá firmo yo Bernardo Namunen [sic].

Fuente: SHE (Caja 20, 896 y 897).

Tratado de paz entre el Gobierno Nacional y el cacique Lemunao o Limonao. Buenos Aires, 13 de octubre de 1869

El Gobierno Nacional Argentino por una parte y por otra la Comisión del cacique Limonao, compuesta de sus dos hijos Henychal y Mariano Ruiz, enviados expresamente por el mencionado cacique a celebrar el presente tratado han convenido en los artículos siguientes:

1° El cacique Limonao con toda su tribu se declara súbdito argentino, y reconoce en el Gobierno General el dominio y soberanía que tiene en todo el territorio de la República, que se comprende por la parte oriental de los Andes hasta terminar en el Estrecho de Magallanes.

2° No reconoce dicho cacique y su tribu ningún dominio, ni autoridad en los caciques Calfucurá y Reuque, ni en ningún otro cacique natural del país o de Chile, titulándose dueños de los territorios pertenecientes a esta República, de una y otra banda del río Negro, la isla de Choelechoel, el río Neuquén y el Limay.

3° Como tales súbditos argentinos, el cacique y toda su tribu, formarán una colonia agrícola militar, sea en Choelechoel o más aproximado a Patagones donde el Gobierno Nacional le designe; y formarán el pueblo con los elementos que el Gobierno les facilite bajo la dirección del ingeniero que mande al efecto.

4° El mencionado cacique y su tribu admitirán y obedecerán a un comisario intendente que el Gobierno mandase para regentar la colonia, y también admitirán uno o más sacerdotes que les enseñen la religión cristiana; uno o más maestros de escuela que eduquen y

enseñen a los niños de ambos sexos, y a una o más personas peritas que les enseñen la agricultura.

5° El mencionado cacique y su tribu declarados que sean súbditos argentinos, harán el servicio militar de frontera como guardias nacionales, contra toda invasión de indios ladrones, o de otro poder extranjero, poniéndose a las órdenes del comandante del punto, o del que el Gobierno mandase, y harán este servicio con sus gentes de armas en sus propios caballos.

6° En caso de una invasión de indios ladrones o de chilenos que se introduzcan a robar a este lado de las cordilleras, territorio argentino, el cacique Limonao y su tribu se comprometen a expedicionar hasta el desierto en persecución de los invasores, y atacarlos donde les diesen alcance, se entiende a las órdenes del jefe que dirija la expedición.

7° Poblados que estuviesen, antes o después de formado el pueblo, el cacique y su tribu se ocuparán en labrar la tierra con los elementos que el Gobierno les proporcione.

8° El Gobierno General por su parte reconoce y declara súbditos argentinos al cacique Limonao y toda su tribu, en los mismos términos y condiciones que expresan los artículos anteriores, y les concede todos los privilegios que las leyes del país acuerdan a los guardias nacionales.

9° Les dará un área de campo en propiedad, suficiente para toda la tribu, donde el terreno sea más a propósito para el cultivo y para la cría de ganados, como también mil ovejas, trescientas vacas, dos tercios de yerba y dos barricas azúcar.

10° Cada año les mandará el Gobierno un vestuario completo de cacique y diez vestuarios de capitanejo completos, para que sean distribuidos uno para cada unote los hijos del cacique y el resto a los capitanejos.

11° Si el cacique y su tribu cumplen fielmente con todo lo que se les ha expresado en los artículos anteriores y que ellos lo prometen, el Gobierno le asignará un sueldo mensual al cacique y cada uno de sus hijos mayores, así como a sus capitanejos principales y esto tendrá lugar cuando ya establecida la colonia, se informado el Gobierno del exacto cumplimiento de todo lo tratado.

En fe de lo cual en el Palacio de Gobierno, en Buenos Aires, a trece de octubre de 1869, se firma el presente tratado por el Exmo. Sr. Ministro de la Guerra y Marina, ante los testigos que firman, y a ruego de la Comisión Limonao el jefe encargado de las tribus, habiéndose hecho dos de un tenor.

D. F. Sarmiento
M. de Gainza

**Tratado de Paz acordado por el Exmo. Gobierno Nacional a las tribus indígenas
que encabezan los caciques Epumer Rosas y Manuel Bagorria,
concluido en 24 de julio de 1878**

S.E. el Sr. Ministro de la Guerra, Gral. D. Julio A. Roca, bajo la inteligencia de que los expresados caciques y tribus reconocen y acatan como miembros y habitantes de la República Argentina la soberanía nacional y autoridad de su Gobierno, ha convenido en lo siguiente:

Por cuanto ha sido concluido en esta ciudad de Buenos Aires un tratado entre el teniente coronel D. Manuel J. Olascoaga comisionado al efecto por parte del Gobierno, y los caciques Cayupan y Huenchugner (a) Chaucalito como representantes el primero del cacique principal Manuel Baigorrita de Poitaguë y el segundo del cacique de igual clase Epugner Rosas de Lebucó cuyo tratado es a la letra como sigue:

Artículo 1º Queda convenido que habrá por siempre paz y amistad entre los pueblos cristianos de la República Argentina y las tribus ranquelinas que por este convenio prometen fiel obediencia al Gobierno y fidelidad a la Nación de que hacen parte y el Gobierno por su parte les concede protección fraternal.

Art. 2º El Gobierno nacional en consideración a lo arriba expresado y mientras los caciques contratantes cumplan y hagan cumplir fielmente lo aquí estipulado asigna al cacique Epumer Rosas (150 B) ciento cincuenta pesos bolivianos al mes; cien pesos bolivianos (100 B) también mensuales al cacique Mariano hijo, Epumer chico. Asigna también mensualmente (7 B) bolivianos siete pesos para un trompa, (15 B) quince pesos bolivianos a un escribiente y quince a un lenguaraz para cada uno. Asigna asimismo al cacique Huenchugner (a) Chaucalito (50 B) cincuenta bolivianos y (15 B) quince bolivianos para su lenguaraz.

Art. 3º El Gobierno Nacional asigna mensualmente al cacique Manuel Baigorrita (150B) ciento cincuenta pesos bolivianos, (7 B) siete pesos bolivianos a un trompa y quince para su lenguaraz.

Art 4º El Gobierno asigna mensualmente al cacique Cayupan (75 B) setenta y cinco pesos bolivianos y quince pesos bolivianos a su lenguaraz; asigna asimismo al cacique Yanquetruz Guaman (50 B) cincuenta pesos bolivianos y quince pesos bolivianos a su lenguaraz.

Art. 5º El Gobierno Nacional acuerda a los dos caciques principales, arriba mencionados, para repartir entre todos los caciques, capitanejos y tribus que comprende este tratado (2.000) dos mil yeguas cada tres meses para su subsistencia.

Art. 6º El Gobierno Nacional dará también a los mismos caciques para la misma aplicación y efecto del artículo anterior, cada tres meses (750 lb) setecientas cincuenta libras de yerba, (500 lb) quinientas libras tabaco negro en rama, (500) quinientos cuadernillos de papel, (2.000lb) dos mil libras harina, (500lb) quinientas libras de azúcar blanca, (200 lb) doscientas libras jabón y dos pipas aguardiente.

Art. 7º Es deber de los caciques arriba mencionados y de todos los capitanejos que los acompañan, entregar al Gobierno todos los cautivos, hombres, mujeres o niños que existen o lleguen a sus tierras o pagos; bien entendido que si el Gobierno tienen alguna vez conocimiento de que en alguna tribu de las que entran en el presente tratado, se ha detenido por fuerza algún cristiano o se le ha hecho algún mal o privado de su libertad, hará responsable

del hecho al cacique más cercano o capitanejo que lo hubiera consentido; privándoles del sueldo o ración que tuvieran, por el tiempo que estime conveniente. Todo lo que se expresa en el presente artículo respecto de los cautivos, queda asimismo estipulado respecto de los malévolos o desertores cristianos que se asilen o guarezcan entre los indios. Tanto los cautivos como los cristianos malhechores deben ser entregados en el fuerte más inmediato al lugar donde se encuentren; siendo bastante motivo para considerar sospechoso y comprendido en esta estipulación, todo cristiano, de cualquiera parte que venga, no teniendo pasaporte o licencia escrita, de un jefe de fronteras.

Art. 8° El cacique Epumer Rosas, el cacique Manuel Baigorrita, y los demás caciques nombrados en este tratado, darán toda protección y amparo a los sacerdotes misioneros que fueren *a tierra dentro*, con el objeto de propagar el cristianismo entre los indios o de sacar cautivos. El Gobierno castigará severamente a todo cacique, capitanejo o indio que no les tributase el debido respeto y hará responsable al cacique que consienta cualquier insultado a las personas de dichos sacerdotes.

Art. 9° Los caciques mencionados se obligan a perseguir a los indios gauchos ladrones y a entregar los malévolos cristianos con los animales que lleven a tierra adentro, así como también entregarán bajo la más seria responsabilidad a todo negociante de ganado robado que cruce por sus campos y pueda ser capturado por alguno de los caciques o capitanejos; conviniendo el Gobierno en recompensar generosamente a los que entreguen en el fuerte más inmediato las personas y haciendas referidas. Así también castigará severamente y hará responsables con sus sueldos y racionamientos a los caciques, capitanejos o tribus que amparen o se nieguen a entregar a dichos negociantes o malévolos.

Art. 10 Su Excelencia el Sr. Ministro de la Guerra deseando proteger y hacer respetar a los caciques que respeten fielmente estos tratados y quieran conservar el orden entre sus tribus, ordenará a todos los jefes de frontera aprehendan y detengan todo indio fugitivo que llegue o se encuentre sin licencia o pasaporte de sus respectivos caciques; y si trajesen animales u otros objetos robados, les sean quitados con cuenta y razón, y devueltos al primer reclamo justificado de los referidos caciques o propietarios; y que asimismo se haga con los cristianos que se hallen en el mismo caso. También ordenará que toda comisión o indios sueltos que vengan a los fuertes o poblaciones cristianas con cualquier negocio o diligencia, trayendo el competente permiso de su cacique, sean protegidos y respetados en sus personas y bienes y recomendará que se les haga entera justicia en sus reclamos y quejas con arreglo a las leyes que amparan a todo ciudadano argentino.

Art. 11° Queda formalmente estipulado que si uno o algunos indios de los que entran en este tratado, dieran malón sobre cualquier punto o metieren robo o asesinato sobre los bienes o persona de algún transeúnte o estanciero, quedará por este sólo hecho rota la paz con el cacique y tribu a que pertenezcan dichos malhechores; y por lo tanto suspendidos los sueldos y racionamientos asignados al cacique y tribu responsable, hasta que se haga efectiva la devolución de lo robado y el castigo de los criminales. En todo robo o asesinato que se cometa por indio sobre cristiano o por algún cristiano sobre indios, las partes acusadas serán prendidas y aseguradas y resultando criminales, serán castigadas con arreglo a las leyes del país, y en cuanto a los animales u objetos robados serán sacados del poder en que se encuentren para devolverlos a sus legítimos dueños.

Art. 12° A más de las concesiones que el Gobierno Nacional hace por este tratado a los caciques y tribus que él comprende, dispondrá que aquellos caciques y tribus que más se

distingan en la conservación del orden y la paz, y muestren dedicación a los trabajos de la labranza y agricultura, como también se presten a la instrucción y civilización de sus hijos, sean obsequiados con alguna gratificación proporcionada al mérito, y se les proporcionen algunos efectos, herramientas y útiles que les sirvan para su adelanto y bienestar.

Art. 13° En caso de guerra exterior o invasión de extranjeros o *ca-mapuches*, todos los caciques y tribus que entran en este tratado se comprometen a prestar decidido apoyo al Gobierno Argentino; bien entendido que serán muy severamente perseguidos y castigados como traidores a la Patria, los caciques y tribus que en algún tiempo se sepa haber tenido relaciones o connivencias con el enemigo.

Art.º 14 Este tratado durará permanentemente mientras ambas partes le resten cumplimiento y los caciques y tribus que enteren cuatro años de haberle dado estricto cumplimiento en todas sus partes, se harán acreedores a un aumento proporcional de sueldos y raciones.

Art. 15° Este convenio será firmado en prueba de asentimiento, por los caciques Cayupan y Huenchugner, como representantes el primero del cacique principal Manuel Baigorrita, y el segundo, del de igual clase Epugner Rosas. Lo suscribirá asimismo el tte. cnel. D. Manuel José Olascoaga, como comisionado al efecto, con la aprobación del Exmo. Gobierno.

A ruego del cacique Cayupan, Patricio Iribé Secretario de Baigorrita

A ruego del cacique Huenchugner, Marín López Secretario de Epumer

Testigo Padre Marcos Donati

Manuel J. Olascoaga